



Asamblea General

Distr. general
6 de agosto de 2019
Español
Original: francés

Consejo de Derechos Humanos

42º período de sesiones

9 a 27 de septiembre de 2019

Tema 4 de la agenda

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Informe de la Comisión de Investigación sobre Burundi* **

Resumen

Desde mayo de 2018 se han seguido cometiendo en Burundi violaciones graves de los derechos humanos, en un clima general de impunidad. Algunas de esas violaciones constituyen delitos contemplados en el derecho internacional. Sus principales autores son miembros de la liga de jóvenes del partido del Gobierno, los Imbonerakure. Asimismo, con frecuencia se ha identificado como autores de esas violaciones a agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y de la policía, así como a responsables de la administración local.

Burundi atraviesa una crisis política y económica desde hace más de cuatro años. Las violaciones de los derechos humanos tienen una dimensión esencialmente política, y la represión de las libertades públicas se acelera a medida que se aproximan las elecciones presidenciales y legislativas de 2020. De conformidad con los principios de alerta temprana y prevención, la Comisión ha identificado numerosos factores de riesgo en el contexto actual. Es necesario seguir con la máxima vigilancia la evolución de la situación.

* Se ha convenido en que el presente documento se publicará después de la fecha normal de publicación por circunstancias ajenas a la voluntad de quienes lo presentan.

** Los anexos del presente documento se reproducen tal como se recibieron, en el idioma en que se presentaron únicamente.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
A. Mandato	3
B. Cooperación de Burundi con la Comisión	3
C. Metodología	4
D. Derecho aplicable	4
E. Acontecimientos en los organismos internacionales y regionales	4
II. Situación de los derechos humanos	6
A. Principales tendencias	6
B. Responsabilidades	7
C. Violaciones de los derechos civiles y políticos	7
D. Violaciones de los derechos económicos y sociales	11
III. Delitos contemplados en el derecho internacional	13
A. Elementos constitutivos y tipología de los delitos	13
B. Responsabilidades individuales	13
IV. Factores de riesgo	13
A. Sinopsis	13
B. Acontecimientos significativos	14
C. Indicadores de los factores de riesgo	16
V. Conclusiones y recomendaciones	18
 Anexos	
I. Carte du Burundi	21
II. Correspondances avec le Gouvernement du Burundi	22
III. Recommandations antérieures faites par la Commission	37
IV. Indicateurs des facteurs de risque communs identifiés dans le Cadre d'analyse des atrocités criminelles (A/70/741-S/2016/71)	50

I. Introducción

A. Mandato

1. La Comisión de Investigación sobre Burundi fue creada en virtud de la resolución 33/24 del Consejo de Derechos Humanos, de 30 de septiembre de 2016, para realizar una investigación exhaustiva de las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos cometidas en Burundi desde abril de 2015, determinar si algunas podrían constituir delitos contemplados en el derecho internacional, identificar a sus presuntos autores y recomendar medidas para garantizar que esas personas rindieran cuentas de sus actos. Este mandato fue prorrogado por dos períodos adicionales de un año en virtud de la resolución 36/19, de 29 de septiembre de 2017, y de la resolución 39/14, de 28 de septiembre de 2018.

2. La composición de la Comisión no ha variado: Doudou Diène (Senegal), Presidente de la Comisión desde el 1 de febrero de 2018, Lucy Asuagbor (Camerún), miembro de la Comisión desde el 5 de marzo de 2018, y Françoise Hampson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), designada el 22 de noviembre de 2016.

3. La Comisión se ha ocupado de las violaciones y vulneraciones cometidas desde mayo de 2018¹ y ha dedicado una atención particular a las relacionadas con el proceso electoral de 2020². Utilizando indicadores objetivos definidos a nivel internacional³, ha intentado determinar la existencia de posibles factores de riesgo indicativos de un posible deterioro de la situación de los derechos humanos. Esta actividad se enmarca en la lógica de los principios de alerta temprana y de prevención⁴, y ofrece informaciones muy valiosas sobre la situación actual y su evolución potencial.

4. En 2019, la Comisión hizo dos exposiciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos. En el presente informe se resumen las conclusiones finales de sus investigaciones, que se detallarán en un documento adicional⁵.

B. Cooperación de Burundi con la Comisión

5. Al igual que en el pasado⁶, con motivo de la renovación del mandato de la Comisión el Consejo de Derechos Humanos instó al Gobierno de Burundi a que cooperara plenamente con la Comisión de Investigación, la autorizara a realizar visitas al país y le facilitara toda la información necesaria para el desempeño de su mandato. Con este ánimo de cooperación, la Comisión envió mensajes en que solicitaba entrevistarse con las autoridades de Burundi en Ginebra y transmitía solicitudes de información precisas, además de enviar una lista no exhaustiva de indicadores de los derechos humanos que podrían permitir al Gobierno evaluar de manera objetiva los efectos de sus políticas y prácticas tendentes a proteger y a promover los derechos humanos. Ninguna de esas solicitudes obtuvo respuesta.

6. Las autoridades de Burundi han seguido rechazando de manera global y sistemática la labor de la Comisión por considerar que tiene un sesgo político, sin aportar argumentos sobre el fondo de sus acusaciones. También han intentado, sin éxito, impedir la presentación del informe de la Comisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2018, algo que el Consejo de Derechos Humanos había solicitado

¹ A fin de reflejar la evolución de la situación desde el informe anterior (A/HRC/39/63), que abarcaba el período 2017-2018.

² Está previsto celebrar elecciones presidenciales y legislativas el 20 de mayo de 2020 y elecciones al Senado el 20 de julio de 2020.

³ Marco de Análisis sobre los Crímenes Atroces, A/70/741-S/2016/71.

⁴ Véase, por ejemplo, A/HRC/30/20.

⁵ Documento A/HRC/42/CRP.2. Puede consultarse en el sitio web de la Comisión.

⁶ Resolución 33/24 del Consejo de Derechos Humanos de fecha 30 de septiembre de 2016, párr. 24; y resolución 36/19 del Consejo de Derechos Humanos de fecha 29 de septiembre de 2017, párr. 5.

expresamente⁷. La hostilidad de las autoridades de Burundi continuó con la declaración de *personae non gratae* en el territorio burundés de los miembros de la Comisión⁸, amenazas e injurias personales contra ellos, así como amenazas de actuaciones judiciales por “difamación” e “intento de desestabilización” del país.

C. Metodología

7. La Comisión ha visitado la República Democrática del Congo, Rwanda, la República Unida de Tanzania, Bélgica, Francia, el Reino Unido y Etiopía. Se ha reunido con representantes de la Unión Africana, de la Unión Europea y de varios Estados, y ha mantenido más de 300 entrevistas en persona o a distancia con víctimas, testigos y otras fuentes, residentes en Burundi o en terceros países, que se han sumado a los cerca de mil testimonios ya recogidos. En caso de que se renueve su mandato, la Comisión espera visitar todos los Estados interesados de la región.

8. La Comisión siguió adoptando la misma metodología y el mismo criterio de prueba, a saber, la existencia de “motivos razonables para creer”, que son perfectamente acordes con las directrices y las prácticas reconocidas internacionalmente para este tipo de investigación⁹.

D. Derecho aplicable

9. El derecho aplicable es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional¹⁰. Burundi sigue siendo parte en los mismos instrumentos que antes, y no ha ratificado aún los tratados en los que había indicado su intención de ser parte con motivo de su tercer examen periódico universal, en enero de 2018.

10. El retiro de Burundi del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, efectivo a partir del 27 de octubre de 2017, no exime al país de las obligaciones que le incumbían mientras era parte en ese tratado¹¹ ni de sus obligaciones en virtud del derecho internacional consuetudinario en materia de delitos internacionales. La Comisión se remite a las definiciones de los delitos establecidas en el Estatuto de Roma, que se recogen en el Código Penal de Burundi.

E. Acontecimientos en los organismos internacionales y regionales

11. Burundi han insistido repetidamente en su voluntad de cooperar con los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, excepto con la presente Comisión. No obstante, el Gobierno exigió el cierre de la oficina en Burundi del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se hizo efectivo el 28 de febrero de 2019. El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no tuvo la oportunidad de visitar Burundi en 2018 como había anunciado, pese a que constituye una obligación jurídica para los Estados partes en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes recibir a la delegación del Subcomité y darle acceso a los lugares de detención. Burundi tampoco ha presentado a los órganos de tratados algunos de sus informes periódicos sobre la aplicación de los instrumentos relativos a los derechos humanos dentro de los plazos previstos, en particular el relativo a la Convención

⁷ Resolución 36/19 del Consejo de Derechos Humanos de fecha 29 de septiembre de 2017, párr. 4.

⁸ Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Burundi de fecha 12 de septiembre de 2018, que se hizo pública pese a no haber sido recibida por la Comisión.

⁹ Véase Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Comisiones de investigación y misiones de determinación de los hechos en derechos humanos y derecho internacional humanitario: guía y práctica*, documento HR/PUB/14/7.

¹⁰ A/HRC/36/54 y Corr.1, párrs. 9 a 11. Véase también A/HRC/36/CRP.1, párrs. 37 a 50 (documento disponible en el sitio web de la Comisión).

¹¹ Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998), art. 127.

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que debía haberse presentado en noviembre de 1998.

12. A pesar de la invitación permanente hecha por Burundi a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, ningún relator especial o grupo de trabajo ha podido visitar el país desde diciembre de 2014 y no se ha previsto ninguna visita para los próximos meses, aunque el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias lo hayan solicitado. A partir de febrero de 2016, Burundi dejó de cooperar con los titulares de mandatos de los procedimientos especiales en relación con presuntos casos de violación de los derechos humanos.

13. De conformidad con su resolución 2303 (2016), el Consejo de Seguridad ha seguido examinando periódicamente la situación en Burundi, el 21 de noviembre de 2018, el 19 de febrero de 2019 y el 14 de junio de 2019¹². El Representante Especial del Secretario General para Burundi, Michel Kafando, así como representantes de Estados Miembros y de la Unión Africana han reiterado sus inquietudes por la situación política actual y el punto muerto en que se encuentra el proceso de diálogo interburundés inclusivo, en particular con la perspectiva de las próximas elecciones, así como por la situación de los derechos humanos y por las condiciones socioeconómicas¹³.

14. La última serie de conversaciones interburundesas, organizada en octubre de 2018 en Arusha (República Unida de Tanzania) bajo la dirección del Facilitador, Benjamin Mkapa, fue boicoteada por el Gobierno de Burundi. El Facilitador concluyó su misión el 1 de febrero de 2019 con la presentación de su informe final a la Cumbre de los Jefes de Estado de la Comunidad de África Oriental, sin ningún resultado concreto. La Comunidad de África Oriental todavía no ha tomado ninguna iniciativa para reiniciar ese diálogo.

15. El 13 de noviembre de 2018, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos aprobó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Burundi¹⁴, en la que expresó su preocupación por la falta de investigaciones adecuadas e independientes sobre los casos denunciados de violaciones de los derechos humanos y por la no aplicación de las recomendaciones que había formulado en 2015. En ella, exhortó a Burundi a cooperar con la Unión Africana, las Naciones Unidas y la Comunidad de África Oriental en la búsqueda de una solución pacífica y respetuosa de los derechos humanos para resolver la crisis burundesa.

16. Según indica la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 344.931 burundeses se habían refugiado en los países limítrofes hasta el 30 de junio de 2019, y se habían registrado 3.603 nuevas llegadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019¹⁵. La crisis humanitaria de los refugiados burundeses es la situación de emergencia que recibe menos financiación en todo el mundo. Así, en 2018, el Alto Comisionado ha recibido solo el 33 % del presupuesto anual solicitado, y a fines de junio de 2019 solamente se había recibido el 18 % de los fondos anuales solicitados. El Alto Comisionado no promueve los retornos a Burundi, pero desde septiembre de 2017 presta asistencia a las personas que deciden regresar voluntariamente a sus hogares. Entre enero y junio de 2019 han regresado al país 14.104 personas¹⁶.

17. En 2019, según las cifras reconocidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Gobierno de Burundi, 1,77 millones de personas tienen necesidad de asistencia humanitaria y 1,7 millones se encuentran en una situación de inseguridad

¹² La sesión programada inicialmente para el 28 de mayo de 2019 fue anulada en el último momento y aplazada hasta el 14 de junio de 2019, en ausencia del Sr. Kafando.

¹³ Véanse S/PV.8408, S/PV.8465 y S/PV.8550.

¹⁴ Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República de Burundi, documento CADHP/Rés. 412 (LXII) 2018.

¹⁵ Esta cifra no incluye necesariamente la totalidad de los recién llegados, ya que en algunos países se ha hecho prácticamente imposible que se reconozca a los burundeses la condición de refugiados.

¹⁶ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Regional overview of the Burundian refugee population", 30 de junio de 2019. Puede consultarse en: <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70281> (en inglés únicamente).

alimentaria¹⁷. Quedan 116.000 personas desplazadas en el interior de su propio país, la mayoría de las cuales mujeres que son cabezas de familia en situación de vulnerabilidad económica. Al 4 de julio de 2019 se había recibido un 30 % del presupuesto para satisfacer las necesidades humanitarias de 2019, estimado en 106,3 millones de dólares de los Estados Unidos.

18. Las sanciones impuestas a ciertos nacionales burundeses, decididas por la Unión Europea y por Suiza, se han renovado hasta octubre de 2019. Se han mantenido las sanciones decididas por los Estados Unidos de América contra 11 nacionales burundeses.

19. Sigue su curso la investigación iniciada el 25 de octubre de 2017 por el Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Burundi entre el 26 de abril de 2015 y el 26 de octubre de 2017.

II. Situación de los derechos humanos

A. Principales tendencias

20. Las principales violaciones de los derechos humanos siguen teniendo una dimensión política y comprenden el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad, el derecho a no ser sometido a tortura o malos tratos, casos de violencia sexual y vulneraciones de las libertades públicas. Se produjeron a raíz del referéndum constitucional de mayo de 2018 o se enmarcan en el contexto de la preparación de las elecciones de 2020. Mayoritariamente, las víctimas siguen siendo opositores, supuestos o reales, al Gobierno o al partido del Gobierno (Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia – CNDD-FDD), principalmente los miembros del nuevo partido político de oposición de Agathon Rwaso, el Congreso Nacional para la Libertad, reconocido en febrero de 2019. También se ha tomado como blancos a nacionales burundeses que se habían refugiado en el extranjero y han regresado en el marco del programa de ayuda al retorno desde comienzos de 2017, así como a jóvenes que han regresado a Burundi después de una estancia o un desplazamiento en el extranjero, acusados de pertenecer a grupos armados de oposición o de prestarles apoyo. También están en el punto de mira los defensores de los derechos humanos, como pone de manifiesto la confirmación de la condena a 32 años de prisión de Germain Rukuki en un procedimiento de apelación, el 17 de julio de 2019.

21. Miembros de los Imbonerakure, agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y de la policía, así como responsables de la administración a nivel de los municipios, de las zonas y de las colinas, han sido identificados como autores de violaciones documentadas. La mayoría de los casos se han producido en las zonas rurales patrulladas por los Imbonerakure, quienes pretenden controlar a la población y obligarla a dar apoyo al CNDD-FDD. Esas actividades van contra el conjunto de la población, particularmente a nivel de las bases. Según los testimonios recogidos, los miembros de las fuerzas de defensa no parecen haber estado implicados de manera significativa en las principales violaciones documentadas desde mayo de 2018, aunque se han denunciado algunos incidentes aislados.

22. El hecho de que esas violaciones sean cometidas principalmente por los Imbonerakure en las zonas rurales, así como el temor de las víctimas o su renuencia general a denunciarlas por su falta de confianza en el sistema judicial, hacen más difícil corroborar las numerosas denuncias de violaciones recibidas.

¹⁷ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Burundi: rapport de situation”, actualizado el 4 de julio de 2019. Puede consultarse en: <https://reports.unocha.org/fr/country/burundi/>.

B. Responsabilidades

1. Responsabilidad del Estado burundés

23. Al igual que en el pasado¹⁸, la Comisión concluye que el Estado burundés puede ser considerado responsable de los hechos señalados en el presente informe, que constituyen violaciones de los derechos humanos.

24. Las acciones de los agentes del Estado, en particular del Servicio Nacional de Inteligencia y de la policía, pero también de las autoridades administrativas que representan al Estado a nivel de las provincias, de los municipios, de las zonas y de las colinas, son imputables directamente al Estado burundés en virtud de la obligación de este de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus agentes se abstengan de cometer violaciones.

25. A menudo los Imbonerakure actúan solos, a veces en presencia de representantes de la policía, del Servicio Nacional de Inteligencia o de las administraciones locales. Gozan de una gran libertad de acción conferida por las autoridades burundesas, que tienen medios para controlarlos, así como de una impunidad casi total. Los Imbonerakure todavía son utilizados regularmente —por no decir casi sistemáticamente— como auxiliares o como sustitutos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en las zonas rurales, a petición de miembros, incluidos algunos de alto rango, del Servicio Nacional de Inteligencia, de la policía, de la Presidencia y de las administraciones locales, o con su asentimiento. Algunos poseen material y equipo militar que en principio está reservado a los cuerpos de defensa y de seguridad, como prendas de uniforme y botas militares, lo que demuestra el papel central que desempeñan en las estructuras de seguridad oficiales y no oficiales del Estado burundés. Cuando el comportamiento de los Imbonerakure es reconocido y adoptado por agentes del Estado¹⁹, cuando actúan siguiendo instrucciones o directrices de estos²⁰, o bajo su “total dependencia” o su “control efectivo”²¹, el Estado burundés es directamente responsable de sus acciones.

26. En las raras ocasiones en que los Imbonerakure hubieran actuado al margen de este tipo de actuaciones, la impunidad general de que se benefician por sus actos correspondería igualmente a la responsabilidad del Estado burundés, de conformidad con la obligación que este tiene de proteger los derechos humanos. Efectivamente, cuando tiene o debería haber tenido conocimiento de violaciones o vulneraciones cometidas por terceros, el Estado debe emprender investigaciones y actuaciones efectivas, lo cual en general no ha sucedido.

2. Responsabilidad de los grupos armados y de los partidos políticos de la oposición

27. A causa en particular de la falta de acceso a las víctimas y de la reiterada negativa del Gobierno a proporcionarle información, la Comisión no ha podido corroborar las denuncias sobre la implicación de grupos armados en las vulneraciones de los derechos humanos.

C. Violaciones de los derechos civiles y políticos²²

1. Derecho a la vida

a) Observación previa

28. Las violaciones del derecho a la vida son cada vez más complejas de documentar, ya que los cadáveres suelen ser hallados por ciudadanos en espacios públicos, a menudo con signos de muerte violenta, sin que se hayan determinado las circunstancias de su deceso. La

¹⁸ Véanse A/HRC/36/54 y Corr.1, y A/HRC/39/63.

¹⁹ *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, 2001, vol. II, segunda parte (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.04.V.17 (parte 2)), artículo 11 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, pág. 27.

²⁰ *Ibid.*, artículo 8 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, pág. 26.

²¹ A/HRC/39/63, párrs. 20 a 27.

²² Véanse más detalles sobre esas violaciones en el documento A/HRC/42/CRP.2.

Comisión no ha recibido informaciones que indiquen que las autoridades hayan emprendido procedimientos para identificar a las víctimas, investigar las causas y circunstancias de su muerte o buscar a los autores. Esas deficiencias de las autoridades burundesas hacen cada vez más complejo distinguir entre desapariciones y ejecuciones. Numerosas personas desaparecen sin que haya testigos y su suerte es incierta excepto en los casos en que se encuentran sus restos en los días siguientes. Efectivamente, la mayoría de las familias no ven la utilidad de presentar una denuncia, o bien temen represalias si hacen averiguaciones ante las autoridades sobre la suerte de sus familiares desaparecidos.

b) Ejecuciones sumarias

29. Los actos de ejecución sumaria han sido cometidos principalmente por miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y por los Imbonerakure actuando por su cuenta. Algunas víctimas han muerto como consecuencia de palizas y otras han sido ejecutadas con armas de fuego o con arma blanca.

30. En algunos casos los restos han sido encontrados en la vía pública o en cursos de agua, pero a veces los autores procuran hacerlos desaparecer.

31. Los Imbonerakure, sustituyendo a las autoridades, han asesinado a personas acusadas de delitos y crímenes de derecho común, en particular de hurto o de brujería, y se atribuyen de este modo el derecho a dictar e impartir justicia.

c) Desapariciones forzadas y otras violaciones

32. La Comisión ha proseguido sus investigaciones sobre presuntos casos de desaparición forzada respecto de los cuales carecía de elementos de información y de corroboración, por lo que únicamente tenía motivos razonables para temer que se tratara de desapariciones forzadas²³. Por lo que respecta a las nuevas informaciones reunidas, la Comisión confirma que existen motivos razonables para creer que Marie-Claudette Kwizera, tesorera de la Liga ITEKA, cuya desaparición se denunció el 10 de diciembre de 2015, y Oscar Ntashano, un hombre de negocios afiliado al CNDD-FDD, exsenador y diputado, desaparecido desde el 20 de abril de 2017, han sido efectivamente víctimas de desapariciones forzadas. Por otra parte, la Comisión ha recibido informaciones que indican que han sido ejecutados.

33. Se han señalado numerosos casos de desaparición de personas. Las víctimas, que a veces no tenían ninguna afiliación política, desaparecieron tras haberse negado a unirse al CNDD-FDD o a los Imbonerakure. Algunas eran miembros de partidos políticos de la oposición o personas que habían regresado recientemente del exilio. A menudo fueron vistas por última vez cuando los Imbonerakure se las llevaban detenidas. En general, las familias han preferido huir y muy raramente han procurado buscar a sus familiares desaparecidos. Con referencia al contexto burundés actual, propicio para las desapariciones forzadas, y teniendo en cuenta los numerosos antecedentes, el perfil de las víctimas y las circunstancias de su desaparición, análogas a los métodos de operación documentados en la materia, la Comisión no puede concluir que se trate de desapariciones forzadas en el sentido del derecho internacional, pero tampoco puede excluirlas. Sigue profundamente preocupada por la frecuencia de esas desapariciones.

2. Derecho a la libertad y la seguridad personal

34. Han persistido la detención y la prisión arbitrarias por razones políticas. Desde la creación del Congreso Nacional para la Libertad en febrero de 2019, sus miembros han sido las víctimas principales en los casos de detención y prisión arbitrarias vinculadas con sus actividades políticas legítimas, generalmente bajo la acusación de organizar “reuniones ilegales” de grupos reducidos en lugares privados o de participar en ellas, pese a que esos hechos no están tipificados como delito en el derecho burundés. También han seguido siendo víctimas los miembros de otros partidos de oposición, que a menudo incluso han sido acusados de apoyar a un grupo armado de oposición. A veces, cuando era imposible encontrar a esas personas, se ha detenido en su lugar a miembros de su familia. Otras personas han sido detenidas y privadas de libertad a raíz del referéndum constitucional de

²³ A/HRC/36/CRP.1, párr. 319.

mayo de 2018, bajo sospecha de haber hecho campaña a favor del “no”. Alumnos menores de edad fueron detenidos durante unos diez días y enjuiciados por “injurias al Jefe del Estado” tras haberse descubierto en los libros escolares fotografías del Presidente tachadas.

35. Han practicado esas detenciones arbitrarias agentes de la policía y del Servicio Nacional de Inteligencia, así como los Imbonerakure y responsables administrativos locales, actuando conjuntamente con la policía o por su cuenta y entregando a continuación a esta a las personas detenidas.

36. Esas detenciones eran arbitrarias ya que, en la gran mayoría de los casos, se efectuaron sin fundamento jurídico, sobre una base en el derecho burundés suficientemente vaga para poder ser utilizada abusivamente o en contravención de los procedimientos judiciales establecidos. Además, a menudo van acompañadas de un uso excesivo de la fuerza. Las detenciones eran igualmente ilegales cuando las practicaban los Imbonerakure o las autoridades administrativas locales, ya que ellos no están facultados por la ley para hacerlo, salvo en casos de flagrancia.

37. Las detenciones eran arbitrarias y a menudo ilegales a causa del carácter vago y abusivo de las acusaciones formuladas, de la falta de elementos constitutivos de la infracción y de la falta de respeto de las garantías procesales y de los plazos legales. Presos que habían cumplido su condena o que se habían beneficiado de una medida de gracia presidencial han permanecido privados de libertad de manera arbitraria, principalmente cuando habían sido condenados por motivos políticos.

3. Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

38. La tortura y los malos tratos persisten en todo el país. Casos de tortura particularmente graves son los relativos a jóvenes acusados de colaboración con un grupo armado de oposición, de espionaje (a menudo a causa de un período de exilio o de permanencia en el extranjero) o de haber hecho campaña activamente a favor del “no” en el referéndum constitucional. En general esos actos han sido cometidos por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y de la policía, en el contexto de la detención y la prisión arbitrarias.

39. Numerosos hombres y mujeres de todas las edades fueron torturados o sometidos a malos tratos a manos de los Imbonerakure, que a menudo actuaban por su cuenta o a veces junto con policías o responsables administrativos locales, en el contexto del referéndum constitucional de mayo de 2018. Se sospechaba que esas personas no habían votado “sí”, o bien se habían negado a unirse al CNDD-FDD o a los Imbonerakure. Otras víctimas han sido los miembros del Congreso Nacional para la Libertad y los refugiados que habían regresado recientemente al país.

40. Las víctimas han recibido patadas en diferentes partes del cuerpo o han sido golpeadas con palos o con porras y otras han sido heridos con objetos cortantes. Numerosos casos de tortura han tomado la forma de violencia sexual, incluidas las violaciones acompañadas de amenazas, incluso de muerte, intimidaciones e insultos, a veces de carácter étnico.

41. El hacinamiento, la falta de alimentos y el acceso insuficiente al agua potable, servicios de higiene y atención médica han persistido en las prisiones y en los calabozos de la policía y del Servicio Nacional de Inteligencia. Esas condiciones siguen siendo constitutivas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

4. Violencia sexual

42. Se han documentado numerosos casos de violencia sexual, cuyas víctimas son principalmente mujeres y niñas. En la mayoría de los casos se trataba de violaciones colectivas cuyos autores eran sobre todo los Imbonerakure y, en un caso, militares. Algunas de esas violaciones se cometieron durante asaltos nocturnos al domicilio de las víctimas, en presencia de sus hijos o de otros miembros de su familia, y en general estaban asociadas a otras formas de atentado contra la integridad física, así como, a veces, al secuestro o la ejecución de un miembro del hogar considerado el cabeza de familia. Otras mujeres fueron violadas cuando se desplazaban como parte de sus actividades cotidianas o intentaban huir del país. Muchas veces esas violaciones iban acompañadas de amenazas de muerte contra la víctima o sus familiares, en caso de que se resistieran, llamaran pidiendo ayuda o

denunciaran la violación. En el caso de algunas personas que habían regresado recientemente a Burundi, las víctimas fueron elegidas por su pertenencia real o supuesta —o la de un miembro de su familia— a la oposición o a un movimiento rebelde, por su negativa a unirse al CNDD-FDD o a los Imbonerakure, por no pagar sus contribuciones o por haber votado negativamente en el referéndum constitucional de mayo de 2018. Esos actos cometidos con un fin específico como la intimidación o el castigo por una supuesta opinión política constituyen tortura.

43. Los casos de violación se han producido mayoritariamente en las zonas rurales. La mayor parte de las víctimas han reconocido como sus agresores a Imbonerakure locales que con anterioridad las habían intimidado, una o varias veces, a ellas mismas o a sus familiares. Sin embargo, ninguna víctima ha denunciado a sus agresores.

44. Los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia también siguieron cometiendo actos de violencia sexual contra hombres reclusos en sus calabozos y que estaban bajo su responsabilidad durante períodos que podían ser de semanas o de varios años; ello incluye casos en que los detenidos fueron obligados a desnudarse y agredidos en los genitales.

45. Las consecuencias físicas y psicológicas de los actos de violencia sexual se han multiplicado, y si bien muchas víctimas han recibido atención médica básica después de los hechos —a menudo gracias a la intervención de vecinos o de familiares—, pocas mujeres y ningún hombre han recibido cuidados de salud apropiados. La estigmatización de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual tiene un impacto negativo en su goce de los otros derechos ya afectados por la persistencia en Burundi de múltiples formas de discriminación contra las mujeres.

46. La Comisión también ha documentado casos de violencia sexual, principalmente violaciones colectivas, asociadas a veces con mutilaciones genitales, cometidas en 2015 y en 2016, que confirman sus conclusiones anteriores. El trauma engendrado por esas formas de violencia, así como el temor a ser estigmatizadas, habían impedido a las víctimas prestar testimonio hasta el momento.

5. Libertades públicas

a) Libertad de expresión y de información

47. El Gobierno controla la difusión de los medios de comunicación en el país por conducto del Consejo Nacional de Comunicaciones, supuestamente un órgano independiente encargado de regular los medios de comunicación, pero que en realidad es un instrumento de censura. Numerosos órganos de información nacionales e internacionales han sido objeto de sanciones, como recientemente la radio Voice of America, suspendida por un período indeterminado, la radio BBC, a la cual se ha retirado la licencia, o incluso Radio France Internationale, que ha recibido una advertencia. Se les reprocha haber difundido opiniones críticas contra el Gobierno o reportajes que contradicen los relatos oficiales. Se acusa regularmente a los medios de comunicación independientes de querer perjudicar la imagen del país y perturbar el orden público.

48. La nueva ley que regula la prensa, promulgada en septiembre de 2018, contribuye directamente a la reducción del espacio democrático en el actual contexto preelectoral. Impone en particular a los periodistas la obligación de “publicar únicamente informaciones equilibradas [...] cuyo origen, veracidad y exactitud se hayan determinado y comprobado escrupulosamente”²⁴.

49. Para el Gobierno cualquier opinión que discrepe de la propaganda oficial equivale a un intento de desestabilización del país o a un ataque contra su soberanía nacional. Por el contrario, las opiniones, los cantos y las declaraciones públicas que incitan a la intolerancia y a la violencia contra cualquier otra formación política distinta del CNDD-FDD son tolerados por las autoridades. Asimismo, las estadísticas de organizaciones internacionales consideradas desfavorables también han sido denunciadas por las autoridades.

²⁴ Burundi, Ley núm. 1/19 de 14 de septiembre de 2018 que modifica la Ley núm. 1/15 de 9 de mayo de 2015 que regula la prensa en Burundi, art. 52.

b) *Libertad de asociación y de reunión*

50. El control gubernamental ejercido sobre la composición y las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras se ha intensificado aún más. Todas las ONG extranjeras han tenido que suspender temporalmente sus actividades a partir del 1 de octubre de 2018 y solicitar una nueva autorización. Se les ha exigido que depositen una tercera parte de su presupuesto anual en el Banco Central de Burundi y que transmitan a las autoridades la lista de sus empleados, indicando su origen étnico. El Gobierno pretende intervenir en adelante en la contratación de los empleados nacionales de esas ONG extranjeras. Las ONG nacionales están controladas estrictamente, tanto en lo relativo a sus declaraciones públicas como a sus proyectos y actividades. Por ejemplo, la organización *Parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités* (PARCEM) vio confirmada su suspensión por el Ministro del Interior el 3 de junio de 2019 por haber presentado un informe crítico sobre las condiciones socioeconómicas basado en los datos del Banco Mundial.

51. Han continuado las actividades tendentes a obligar a la población, principalmente a los hombres, a unirse al CNDD-FDD o a los Imbonerakure; en particular se ha recurrido al hostigamiento, a amenazas de muerte, a malos tratos e incluso a detenciones arbitrarias. En este caso se trata de violaciones del corolario de la libertad de asociación, que es la libertad de no asociarse.

52. Los miembros de los partidos de oposición también están en el punto de mira, con el propósito de hacerles abandonar sus actividades políticas. Por otra parte, todas las actividades de los partidos de oposición están estrechamente controladas y limitadas, particularmente las del Congreso Nacional para la Libertad. Se han impedido reuniones de pequeños grupos de miembros de ese partido y se ha detenido a los participantes.

c) *Libertad de circulación*

53. Se siguen observando impedimentos a la libertad de circulación. En las carreteras hay barreras, generalmente levantadas por los Imbonerakure, para controlar los desplazamientos de la población. Para poder desplazarse, los burundeses debían presentar habitualmente un recibo del pago de la contribución a las elecciones de 2020 o desembolsar una suma aleatoria cuyo destino final era incierto. Los controles han sido más intensos en las zonas fronterizas y en muchos casos han ido acompañados de actos de violencia e intimidación.

54. En algunos lugares, las autoridades administrativas locales han decretado medidas de restricción de los movimientos después de las 18.00 o las 19.00 horas, aplicables únicamente a las mujeres y a las niñas, presuntamente con el propósito de impedir “los embarazos indeseables” y “el libertinaje”.

d) *Libertad religiosa*

55. El Gobierno ha incrementado su control de las iglesias. El Gobierno y sus aliados también han dirigido advertencias a los líderes religiosos, en particular los obispos de la Iglesia Católica, para desalentar toda opinión crítica o de “carácter político”, y han hecho un llamamiento a los fieles para que los vigilen. Además, ciertas personas han sido obligadas a participar en el referéndum constitucional, o a unirse al CNDD-FDD, aunque ello fuera contrario a sus convicciones religiosas.

D. Violaciones de los derechos económicos y sociales

1. Derecho a un nivel de vida adecuado

56. Burundi es uno de los países más pobres del mundo, con un 74,7 % de sus habitantes que viven en la pobreza²⁵. El país ocupa el 185º lugar de un total de 189 según el índice de desarrollo humano; la esperanza de vida al nacer es tan solo de 57,9 años y el ingreso nacional bruto por habitante y por año (en paridad del poder adquisitivo)

²⁵ Banco Mundial, “La Banque mondiale au Burundi”. Puede consultarse en: www.banquemondiale.org/fr/country/burundi.

es de 702 dólares²⁶. El país, que estuvo en recesión económica en 2015 y en 2016, experimenta desde 2017 una recuperación que es frágil, ya que la crisis política ha reducido su acceso a la ayuda internacional, de la cual tiene una gran dependencia, y ha conllevado un déficit de la balanza comercial, la escasez de divisas y un aumento del costo de la vida. La población también se ve obligada a pagar regularmente diversas contribuciones exigidas sin ningún fundamento legal, incluso para financiar la construcción de sedes locales del CNDD-FDD. Las principales contribuciones asociadas a las elecciones de 2020 eran en parte obligatorias, pero el 30 de junio de 2019 el Presidente anunció su abolición y afirmó que en adelante se efectuarían únicamente con carácter “voluntario”. Esas contribuciones múltiples han sido recaudadas por los Imbonerakure, que no han vacilado en recurrir a la violencia y a las amenazas. Hay testimonios que indican que quienes no estaban en condiciones de pagar a menudo eran víctimas de malos tratos y/o se les privaba del acceso a los servicios públicos.

57. Numerosos refugiados que regresaron a Burundi en el marco del programa de ayuda al retorno fueron despojados por los Imbonerakure y las autoridades administrativas locales de sus paquetes de víveres y del dinero que habían recibido. Según indican las informaciones aportadas por las víctimas, se trataba en la práctica de represalias contra ellas por haber huido de Burundi después de 2015 y no haber participado en su desarrollo ni contribuido a las elecciones. Esas personas se encuentran entonces sin recursos y algunas de ellas se han visto obligadas a huir de nuevo.

2. Derecho al trabajo

58. La contratación en los sectores público y paraestatal se efectúa de una manera discriminatoria, basada en la afiliación política y no en la experiencia o en las cualificaciones, incluso en la enseñanza, la salud, el sector judicial o las empresas públicas. Las personas que ya ocupan un puesto y no son miembros del CNDD-FDD corren el riesgo de perder su empleo. La politización del acceso al empleo va en aumento y ya afecta a las ONG extranjeras.

3. Derecho a la educación

59. En muchos centros escolares, se prohibió el acceso a las clases a los alumnos que no habían pagado la contribución para las elecciones de 2020, obligatoria para todos los alumnos en edad de votar. Se llegó a una situación en que, el 8 de febrero de 2019, la Ministra de Educación tuvo que prohibir esa práctica. Por otra parte, ha habido casos de alumnos que se han visto privados de la enseñanza o han sido hostigados o amenazados por maestros o por otros alumnos pertenecientes al CNDD-FDD a causa de su afiliación a otro partido, a pesar de que teóricamente no debe llevarse a cabo ninguna actividad política en los centros. Los escolares acusados de haber tachado la fotografía del Presidente también se vieron privados de asistir a la escuela por un período indeterminado. La calidad de la enseñanza sufre las consecuencias de la desertión de maestros cualificados y su sustitución basada en la afiliación política. El abandono escolar es frecuente, incluso el relacionado con los embarazos y con la situación socioeconómica. La duración media de la escolarización es tan solo de tres años²⁷.

4. Trabajo forzoso

60. Los trabajos comunitarios consistían inicialmente en la limpieza de las calles y otros trabajos menores de mantenimiento en beneficio de la colectividad. Más adelante esos trabajos obligatorios han cobrado una dimensión política. Se ha obligado a la población a construir sedes locales del CNDD-FDD, bajo pena de una sanción financiera, lo cual constituye un trabajo forzoso prohibido por el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105) de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Burundi en 1963.

²⁶ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Índices e indicadores de desarrollo humano: actualización estadística de 2018*, pág. 25.

²⁷ *Ibid.*

61. Otros trabajos comunitarios están orientados al desarrollo local mediante la construcción de infraestructuras públicas como estadios, carreteras, escuelas y centros de salud. Desde 2015, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo examina la compatibilidad de esas obras con el derecho internacional, que dispone que los trabajos obligatorios como método de movilización y de utilización de la mano de obra con fines de desarrollo económico son una forma de trabajo forzoso²⁸.

III. Delitos contemplados en el derecho internacional

A. Elementos constitutivos y tipología de los delitos

62. La Comisión sigue teniendo motivos razonables para creer que se han cometido en Burundi crímenes de lesa humanidad con arreglo a la definición del Estatuto de Roma, a saber, asesinatos, encarcelamientos u otras formas graves de privación de la libertad física, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecuciones de carácter político²⁹.

63. La Comisión ha documentado un gran número de incidentes violentos cometidos en diversas provincias por distintos autores con métodos de operación similares y con un objetivo común, a saber, suprimir toda oposición política real o supuesta que pudiera cuestionar el mantenimiento en el poder del Gobierno y del CNDD-FDD. Por tanto, esos incidentes pueden calificarse de “ataques sistemáticos” dirigidos deliberadamente contra civiles. Representantes del Gobierno, de las autoridades administrativas locales y del CNDD-FDD recuerdan regularmente a la población este objetivo de mantenerse en el poder. Los presuntos autores de esos delitos internacionales están claramente informados de dicho objetivo, lo cual significa que tienen necesariamente conocimiento del contexto en el que se inscriben sus actos.

B. Responsabilidades individuales

64. La Comisión ha seguido completando la lista de presuntos autores de crímenes de lesa humanidad, teniendo cuidado de distinguir entre las responsabilidades directas y las responsabilidades de los superiores jerárquicos, civiles o militares. Esta lista, en aras de la protección de las fuentes y del respeto de la presunción de inocencia de los presuntos autores, se mantiene confidencial, pero la Comisión se reserva la posibilidad de darla a conocer.

IV. Factores de riesgo

A. Sinopsis

65. De conformidad con los principios de prevención y de alerta temprana promovidos por las Naciones Unidas, la Comisión decidió que era importante determinar si existían factores de riesgo particulares vinculados con las elecciones de 2020 que pudieran tener un impacto en la situación de los derechos humanos. Para ello recurrió al Marco de Análisis sobre los Crímenes Atroces elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger³⁰. Los factores de riesgo son condiciones que crean un entorno propicio para la comisión de crímenes atroces o son indicativas de su posible ocurrencia. Algunos son estructurales y otros están vinculados a circunstancias dinámicas. Los indicadores objetivos incluidos en el Marco de Análisis

²⁸ Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105), art. 1 b).

²⁹ A/HRC/36/CRP.1, párrs. 682 a 691.

³⁰ A/70/741-S/2016/71.

constituyen manifestaciones diversas de cada factor y ayudan a determinar en qué medida este está presente. Observar la situación y alertar de la existencia de factores de riesgo —sin pronunciarse sobre la probabilidad de que se produzcan— es una actividad necesaria, ya que la alerta puede ser por sí misma un instrumento de prevención y de mitigación de los riesgos de deterioro de la situación de los derechos humanos. Por tanto, la Comisión ha intentado identificar los indicadores presentes en el contexto burundés a fin de determinar los factores de riesgo existentes.

B. Acontecimientos significativos

1. Persistencia de la crisis política de 2015

66. La crisis generada en 2015, que tiene ante todo un carácter político, continúa afectando a la sociedad burundesa. El diálogo interburundés inclusivo se encuentra en un punto muerto, ya que el Gobierno de Burundi ha rechazado ese proceso y su necesidad. La población se sigue empobreciendo y los numerosos refugiados burundeses continúan sin perspectivas reales de futuro. Las autoridades burundesas se niegan a dialogar para resolver esa crisis política profunda, y consideran que todas las iniciativas de la comunidad internacional orientadas a solucionarla o a abordar las violaciones de los derechos humanos y los delitos internacionales son atentados contra la soberanía nacional y tentativas de desestabilización. Prevalece la impunidad y las víctimas siguen careciendo de vías de recurso.

2. Elecciones de 2020

67. La existencia de un espacio democrático es un indicador crucial para la celebración de elecciones justas, libres y creíbles. Desde 2015, este espacio se ha ido restringiendo constantemente en Burundi, con mecanismos nacionales de derechos humanos que no son independientes ni eficaces. El Gobierno incrementa su control de las ONG y la libertad de prensa se ha convertido en una ficción debido a la censura ejercida por el Consejo Nacional de Comunicaciones.

68. No existe en Burundi un auténtico multipartidismo. La mayoría de los partidos han sido infiltrados o divididos de manera que solo se reconoce oficialmente el ala favorable al poder. El espacio político sigue estando bloqueado por el CNDD-FDD. Las esperanzas suscitadas por la autorización del Congreso Nacional para la Libertad en febrero de 2019 se han visto decepcionadas rápidamente. Sus miembros son víctimas de hostigamiento, e incluso perseguidos, y las actividades del partido son restringidas, controladas o prohibidas, lo cual pone de manifiesto la intolerancia política reinante en Burundi. Esta situación podría indicar una crisis de confianza en el interior del CNDD-FDD, que se sentiría amenazado por la popularidad del Congreso Nacional para la Libertad. La historia de Burundi demuestra que el CNDD-FDD recurre a estrategias violentas cuando se enfrenta a una oposición estructurada, en particular en el marco de unas elecciones. Además, aumenta la confusión entre el CNDD-FDD y las entidades del Estado.

69. Se ha observado además una deriva por lo que respecta al ejercicio del poder por el Jefe del Estado. Este dispone de amplios poderes en virtud de la Constitución, pero no vacila en tomar decisiones que sobrepasan sus prerrogativas, como la designación de la Junta del Consejo Nacional de Comunicaciones. Por otra parte, continúa apoyándose en estructuras paralelas opacas e informales, como el “comité de generales”³¹. También ha utilizado el Consejo Nacional de Seguridad³², que él mismo preside, para gobernar directamente. Así, mientras que el citado Consejo no tiene competencias para adoptar decisiones, es el que decidió suspender a las ONG extranjeras en octubre de 2018. La adscripción directa del Servicio Nacional de Inteligencia a la Presidencia es otro ejemplo significativo de su acaparamiento de poder. La facilidad con que el Presidente elude las instituciones pone de manifiesto la debilidad de estas.

³¹ A/HRC/39/CRP.1, párr. 733 (documento disponible en el sitio web de la Comisión).

³² Órgano consultivo creado en virtud del artículo 275 de la Constitución, encargado de prestar asistencia al Presidente y al Gobierno para la elaboración de la política y el seguimiento en materia de seguridad, y para la elaboración de las estrategias de defensa, de seguridad y de mantenimiento del orden en casos de crisis.

70. La retórica del origen divino del poder del Presidente está cada vez más presente en los discursos oficiales de la pareja presidencial. También se pone de manifiesto una deriva religiosa en ciertas decisiones del Jefe del Estado, en particular su proyecto de moralizar la sociedad de manera que recupere sus “auténticos valores”. Sus frecuentes referencias a la monarquía burundesa, así como la decisión de restablecer el lema monárquico “Dios, Rey, Patria” en los monumentos públicos, generan entre los analistas y algunos burundeses especulaciones sobre una posible restauración de la monarquía en beneficio propio.

71. La cultura de secretismo característica del CNDD-FDD no permite saber cuál es el procedimiento de designación del candidato del partido para las elecciones presidenciales, lo cual lleva a preguntarse si esa demora no guarda relación con posibles dificultades en el interior del partido, como sucedió en 2015.

72. El 20 de mayo de 2019 se promulgó un nuevo Código Electoral. Los candidatos independientes son sometidos a limitaciones para presentarse a las elecciones parlamentarias y deben obtener puntuaciones superiores a las exigidas a los candidatos de los partidos.

73. La Comisión Electoral Nacional Independiente, cuyos siete miembros son próximos al CNDD-FDD o sus partidos aliados, no es independiente ni del poder ejecutivo ni del CNDD-FDD.

3. Instrumentalización de la historia

74. En Burundi, la cuestión étnica tiene una gran profundidad histórica. Ya se trate de una creación colonial o de una realidad social tradicional a menudo instrumentalizada, sigue siendo uno de los elementos determinantes de la actual identidad de una mayoría de burundeses. Desde la independencia, numerosas violaciones de los derechos humanos que presentaban una dimensión étnica han generado en muchos burundeses desconfianza y resentimiento hacia el otro grupo y han creado memorias diferenciadas. El Jefe del Estado multiplica las sesiones de moralización durante las cuales enseña la “verdadera” historia de Burundi. La nueva Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que no es independiente, tiene el mandato de “reescribir la historia de Burundi” y de investigar los crímenes y las violaciones cometidos desde 1885.

75. Las actuales iniciativas hacen temer la imposición de una versión oficial tendenciosa de la historia del país, que podría hacer resurgir los agravios del pasado, con consecuencias inquietantes. La ausencia de auténticos procesos de reconciliación y de justicia de transición adaptados, como prevé el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi, contribuye al mantenimiento de esas divisiones, que algunos podrían intentar instrumentalizar con fines políticos.

4. Incertidumbres en materia de seguridad

76. Diversos grupos rebeldes armados presentes en los países vecinos han anunciado que podrían recurrir a las armas para resolver la situación en Burundi. Lamentablemente, la falta de perspectivas de solución de la crisis podría incitarlos a ello. Asimismo, algunos refugiados podrían ser convencidos de sumarse a un grupo armado, tanto más cuanto la presencia de los Imbonerakure en algunos campamentos crea entre ellos una sensación de inseguridad. Se desconoce la capacidad de los grupos armados para emprender operaciones de envergadura en Burundi. Paralelamente, Burundi acusa regularmente a Rwanda de intentar desestabilizar al país y de retener por la fuerza a los refugiados burundeses.

77. En el interior del país, la situación del ejército, que es un factor de estabilidad desde el Acuerdo de Arusha, se ha vuelto incierta. Durante mucho tiempo las fuerzas armadas se han beneficiado de unas condiciones económicas y sociales ventajosas. El intento de golpe de estado de mayo de 2015 puso de manifiesto la existencia de disensiones en el ejército, que desde entonces es objeto de una vigilancia parcial. Ha habido purgas en forma de detenciones y de eliminaciones físicas. No parece que se siga respetando el equilibrio étnico previsto por la Constitución. Existe también cierto cansancio y cierta disconformidad en el propio ejército, en particular a causa de la amenaza que se cierne sobre los lucrativos desplazamientos en las misiones de paz.

78. El Servicio Nacional de Inteligencia, adscrito directamente a la Presidencia, ya no forma parte oficialmente de las fuerzas de defensa y de seguridad, por lo que ya no está sometido ni al control del Parlamento ni a las cuotas étnicas. Esta reorganización del aparato de seguridad es preocupante.

79. Los comités mixtos de seguridad humana, establecidos a partir de 2014 a todos los niveles con mandatos extraordinariamente vagos, están controlados por las autoridades administrativas locales fieles al CNDD-FDD y por los Imbonerakure. Estos prevalecen sobre las fuerzas de policía para todas las cuestiones de seguridad, que adquieren una dimensión política. Los Imbonerakure multiplican las rondas nocturnas en las colinas y las sesiones de entrenamiento deportivo en masa, a menudo con una dimensión paramilitar, lo cual inquieta e intimida a una parte de la población. Paralelamente, desde comienzos de 2019 se vienen produciendo incidentes que tienen como víctimas a miembros de las fuerzas de seguridad y de defensa, aunque sus autores no se han identificado.

C. Indicadores de los factores de riesgo

80. Este breve resumen de los acontecimientos más significativos permite identificar los indicadores presentes, que a su vez están vinculados a ocho factores de riesgo comunes enumerados en el Marco de Análisis sobre los Crímenes Atroces.

81. La inestabilidad en materia de seguridad crea un entorno propicio para los crímenes atroces (factor de riesgo núm. 1) que denotan los indicadores siguientes: numerosos burundeses, tanto en el país como en el exterior, están en una situación de emergencia humanitaria (1 c)); la transferencia de poder que se produjo en 2015 creó una crisis política profunda que todavía no se ha resuelto (1 d)); existe un riesgo de inestabilidad política derivada de probables disputas por el poder en el CNDD-FDD y de la existencia de movimientos de oposición armados (1 e)); una tensión política causada por un régimen autocrático autor de una represión política dura contra todos los opositores, reales o supuestos (1 f)); una inestabilidad económica causada por la escasez de recursos (1 g)); una crisis grave en la economía nacional (1 h)) y la pobreza aguda de la población (1 i)).

82. El factor de riesgo núm. 2 se refiere a la existencia de antecedentes de violaciones graves de los derechos humanos que no se han prevenido ni sancionado y, en consecuencia, generan riesgo de nuevas violaciones. Ponen de manifiesto este factor los indicadores siguientes: la existencia de violaciones graves de los derechos humanos pasadas o presentes (2 a)); la existencia de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que han marcado la historia reciente de Burundi (2 b)); la existencia de una política o práctica de impunidad o tolerancia ante las violaciones graves de los derechos humanos (2 c)); la negativa del Gobierno de Burundi a utilizar todos los medios posibles para detener las violaciones graves de los derechos humanos o su renuencia a hacerlo (2 d)); la continuación del apoyo de las autoridades burundesas a los grupos acusados de participar en violaciones de los derechos humanos, y la falta de condena de sus acciones (2 e)); la negativa del Gobierno a reconocer la existencia de las violaciones graves de los derechos humanos o la práctica de presentar un relato sesgado al respecto (2 f)); la ausencia de auténticos procesos de reconciliación o justicia de transición, y la instrumentalización con fines políticos de la labor de la nueva Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2 g)); una desconfianza generalizada de la población en las instituciones del Estado, particularmente las fuerzas de seguridad y el sistema judicial o entre distintos grupos a raíz de la impunidad (2 h)).

83. También está presente el factor de riesgo núm. 3, a saber, la debilidad de las estructuras del Estado que afecta negativamente a la capacidad de un Estado para prevenir o detener los crímenes atroces y para juzgarlos. Efectivamente, las instituciones nacionales, en particular judiciales, encargadas de la aplicación de la ley y de la protección de los derechos humanos carecen de recursos suficientes y de representación adecuada (3 b)); la justicia no es ni independiente ni imparcial³³ (3 c)); no hay un control civil efectivo por el Parlamento de las fuerzas de seguridad (3 d)); hay un nivel elevado de corrupción o mala gobernanza³⁴ (3 e));

³³ A/HRC/39/CRP.1, párrs. 462 a 579.

³⁴ *Ibid.*, párrs. 179 a 215.

los mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas que permiten a las víctimas recurrir para obtener reparación son insuficientes e ineficaces, y los mecanismos externos casi inexistentes o difícilmente accesibles para las víctimas (3 f)).

84. El factor de riesgo núm. 4 es la existencia de razones, objetivos o factores impulsores que justifiquen el uso de la violencia contra grupos particulares. Desde la perspectiva de la alerta temprana, es sumamente importante que se puedan determinar las motivaciones u otros elementos que podrían incitar a que determinados grupos recurrieran a una violencia masiva como medio de alcanzar sus objetivos. La presencia de este factor viene indicada por lo siguiente: motivos políticos, en particular la aspiración a consolidar el poder, que recuerdan regularmente los miembros del Gobierno y del CNDD-FDD (4 a)); intereses económicos vinculados a la conservación del poder, decisiva para el control sobre la distribución de los recursos (4 b)); la existencia de amenazas reales o percibidas contra los intereses u objetivos del Gobierno, incluida toda forma de deslealtad a la causa del CNDD-FDD (4 e)); la pertenencia o el apoyo reales o percibidos de ciertos grupos a la oposición armada (4 f)); la ideología del CNDD-FDD caracterizada por su paradigma de “verdad” y por tanto de supremacía de esa identidad política sobre todas las demás (4 g)); la instrumentalización política de agravios, tensiones o impunidad anteriores (4 h)); la existencia de un trauma social causado por incidentes anteriores de violencia que no se hayan resuelto adecuadamente y que hayan generado sentimientos de pérdida, desplazamiento o injusticia y un posible deseo de venganza (4 i)).

85. El factor de riesgo núm. 5 es la capacidad de los agentes pertinentes para cometer crímenes atroces. Este factor debe evaluarse conjuntamente con los demás factores, especialmente los relativos a la intención y la motivación. En el caso de Burundi, se mide por lo siguiente: la disponibilidad de personal y de armas y municiones, o de recursos financieros, públicos o privados, para su adquisición (5 a)); la capacidad para transportar y desplegar personal y para transportar y distribuir armas y municiones (5 b)); la capacidad para motivar o reclutar a un gran número de seguidores entre poblaciones o grupos, y disponibilidad de medios para movilizarlos, como en el caso de los Imbonerakure (5 c)); una cultura sólida de obediencia a la autoridad y conformidad grupal, presente en el CNDD-FDD y entre los Imbonerakure (5 d)); la presencia de otras fuerzas armadas o grupos armados no estatales o la existencia de vínculos con ellos (5 e)).

86. Los factores atenuantes son los elementos internos y externos que podrían contribuir a prevenir la escalada de la violencia, detenerla o reducir sus efectos, cuya ausencia en el contexto de Burundi (factor de riesgo núm. 6) es significativa: la inexistencia de una sociedad civil nacional fuerte, organizada y representativa, y de medios de comunicación nacionales libres, diversos e independientes (6 b)); la falta de acceso a los medios de comunicación internacionales (6 c)); la presencia y acceso a la población limitados de las Naciones Unidas, las ONG internacionales u otros agentes internacionales o regionales en el país (6 d)); la falta de contacto, exposición y apertura, o de relaciones políticas o económicas con otros Estados (6 f)); una cooperación limitada o incluso inexistente con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos (6 g)); la falta de voluntad del Gobierno para entablar un verdadero diálogo para resolver la crisis de 2015, hacer concesiones o recibir apoyo de la comunidad internacional (6 h)); la inexistencia de un mecanismo de alerta, puesto que el Observatorio Nacional para la Prevención y la Erradicación del Genocidio, los Crímenes de Guerra y Otros Crímenes de Lesa Humanidad no cumple esa función de manera independiente (6 k)).

87. El factor de riesgo núm. 7 se refiere a las circunstancias propicias o acciones preparatorias, ya sean repentinas o graduales, que proporcionan un entorno propicio para la comisión de crímenes atroces o que parecen indicar una trayectoria hacia su comisión. Los principales indicadores presentes son los siguientes: la interferencia en las actividades de las instituciones vitales del Estado, o medidas que dan lugar a cambios en su composición o en el equilibrio, como sucede en el caso de las cuotas basadas en el origen étnico (7 b)); el fortalecimiento de la estructura de seguridad, su reorganización o movilización (7 c)); la expulsión o la negativa a permitir la presencia de las ONG, las organizaciones internacionales, los medios de comunicación y otros agentes pertinentes, o la imposición de severas restricciones a sus actividades y desplazamientos (7 g)); el aumento de las violaciones del derecho a la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de toda

persona considerada un oponente político desde el comienzo de la crisis de 2015 (7 h)); el aumento de los actos graves de violencia contra las mujeres y los niños, o la creación de condiciones que faciliten la comisión de actos de violencia sexual contra esos grupos, especialmente como instrumento para sembrar el terror (7 i)); el aumento de la politización de la identidad, los hechos pasados o los motivos para recurrir a la violencia (7 m)); el aumento de la retórica incendiaria, campañas de propaganda o la incitación al odio contra toda persona considerada un oponente político desde el comienzo de la crisis de 2015 (7 n)).

88. También se observa la presencia de factores desencadenantes (factor de riesgo núm. 8), como demuestran los indicadores siguientes: las medidas adoptadas por la comunidad internacional son percibidas por las autoridades de Burundi como una amenaza para la soberanía del Estado (8 c)); hubo una transferencia abrupta o irregular del poder en 2015 (8 d)); se han perpetrado ataques contra la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de dirigentes, personas prominentes o miembros de grupos opositores (8 e)); hay actos de propaganda e incitación al odio destinados a los opositores políticos (8 g)); se ha previsto la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en 2020 (8 h)); los actos de conmemoración de delitos pasados o acontecimientos traumáticos o de episodios históricos con una base étnica pueden exacerbar las tensiones entre grupos (8 k)); los actos relacionados con los procesos de rendición de cuentas por crímenes atroces del pasado pueden percibirse como injustos (8 l)).

89. Es obligado constatar que los ocho factores de riesgo comunes identificados en el Marco de Análisis sobre los Crímenes Atroces están presentes en el contexto actual de Burundi, con un número significativo de indicadores para cada uno de ellos³⁵. Si bien esto no permite extraer conclusiones sobre la probabilidad de que se produzcan crímenes atroces ni, dado el caso, determinar en qué momento o de qué manera se producirán, la presencia de esos factores ofrece a la comunidad internacional una base objetiva para comprender la realidad de la situación en Burundi y los posibles riesgos. La constatación de la existencia de numerosos factores de riesgo exige ejercer una intensa vigilancia de la evolución de la situación en Burundi.

V. Conclusiones y recomendaciones

90. Como resultado de sus investigaciones, la Comisión concluye que desde mayo de 2018 han seguido produciéndose violaciones graves de los derechos humanos —algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad—, en particular violaciones del derecho a la vida, detenciones y reclusiones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, agresiones sexuales y vulneraciones de los derechos económicos y sociales, todo ello en un clima general de impunidad. Por otra parte, las vulneraciones de las libertades públicas van en aumento.

91. La Comisión sigue siendo el único mecanismo independiente y objetivo que investiga las violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones de esos derechos en Burundi, las documenta e informa al respecto a la comunidad internacional.

92. La situación de crisis persiste desde hace más de cuatro años, sin una auténtica perspectiva de solución. Las condiciones de la vida cotidiana de los burundeses empeoran cada vez más, tanto en el interior como en el exterior del país.

93. La celebración de las elecciones de 2020 es un factor de riesgo importante. Para que puedan celebrarse en un clima de tranquilidad y sean al mismo tiempo justas, libres, transparentes y creíbles, la Comisión dirige a las autoridades burundesas las recomendaciones siguientes:

a) Aplicar todas las recomendaciones anteriores de la Comisión³⁶, que siguen siendo más válidas y pertinentes que nunca, en particular las relativas a las medidas prioritarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los

³⁵ La Comisión considera que otros indicadores están presentes solo de manera parcial. Por ello no se han mencionado en el presente informe, pero se detallan en el documento A/HRC/42/CRP.2.

³⁶ Véase el anexo III (A/HRC/36/54 y Corr.1, párrs. 85 a 94; y A/HRC/39/63, párrs. 85 y 86).

delitos internacionales, luchar contra la impunidad y mejorar la situación de los derechos humanos en el país, así como las recomendaciones a mediano y a más largo plazo relativas a la revisión del marco jurídico y a la reforma del sistema judicial;

b) Empezar sin demora investigaciones independientes y eficaces sobre los casos de violaciones documentadas por la Comisión desde 2015, a fin de permitir la instauración de un clima de confianza y de tolerancia política que aliente a una participación inclusiva en el proceso electoral;

c) Volver a participar de manera constructiva y cooperativa con todos los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y permitirles cumplir de manera libre y cabal sus mandatos de vigilancia de los derechos humanos;

d) Asegurar la independencia estructural y financiera de los mecanismos nacionales de derechos humanos y fortalecer la capacidad de sus miembros;

e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de creación, organización y funcionamiento de las ONG extranjeras y nacionales, incluso modificando las leyes que las regulan;

f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de información en el país y el derecho de los medios de comunicación locales e internacionales a ejercer sus actividades de conformidad con las normas internacionales, incluso modificando las leyes sobre la prensa y el Consejo Nacional de Comunicaciones;

g) Garantizar el goce efectivo de las libertades públicas, en particular las libertades de opinión, de expresión, de acceso a la información, de asociación, de reunión y de religión, incluso poniendo fin a cualquier práctica de reclutamiento forzado en el partido del Gobierno y su liga de jóvenes;

h) Aplicar las Directrices sobre el acceso a la información y las elecciones en África y las Directrices sobre la libertad de asociación y de reunión en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

i) Garantizar que todos los partidos políticos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas con toda libertad y seguridad, en un clima de tolerancia política, en particular sancionando toda retórica de incitación al odio y a la violencia contra los demás partidos políticos y sus miembros;

j) Garantizar en la práctica, en particular modificando el Código Electoral, el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos sin discriminación;

k) Garantizar en la práctica la independencia estructural de la Comisión Electoral Nacional Independiente, en particular modificando el decreto que la regula de modo que su composición sea inclusiva y equilibrada, y fortalecer la capacidad de sus miembros en los niveles municipal y provincial;

l) Permitir el acceso de observadores electorales independientes, internacionales y regionales, y garantizarles, así como a los observadores nacionales procedentes de la sociedad civil o de los partidos políticos, la libertad de acción antes de las elecciones, durante su celebración y después de las mismas;

m) Aplicar las Directrices para las misiones de observación y de seguimiento de las elecciones de la Unión Africana;

n) Permitir que los opositores políticos vuelvan del exilio para participar en las elecciones de 2020, y garantizar su libertad y su seguridad, en particular revocando las órdenes de detención contra quienes no hayan utilizado o propugnado la violencia;

o) Poner inmediatamente en libertad a todos los presos políticos detenidos o reclusos en relación con el ejercicio de sus derechos democráticos;

p) Fortalecer la capacitación de las fuerzas de mantenimiento del orden a fin de evitar los malos tratos y asegurar una gestión pacífica de las multitudes;

q) Aplicar las Directrices para el mantenimiento del orden por los agentes encargados de hacer cumplir la ley en las reuniones en África, y el manual de capacitación conexo, elaborados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

r) Poner fin a la impunidad de los Imbonerakure ejerciendo control sobre ellos, a fin de evitar la usurpación de las funciones de las fuerzas de seguridad o de la justicia y poner fin a sus actividades represivas y demostraciones de fuerza en las colinas;

s) Poner fin a todas las contribuciones ilegales.

94. A todos los partidos políticos burundeses, independientemente de que participen o no en las elecciones, la Comisión recomienda que se abstengan de todo acto violento y de toda incitación al odio y a la violencia, en particular en el contexto de las elecciones de 2020.

95. A los grupos rebeldes de oposición, la Comisión recomienda que se abstengan de todo acto violento y de toda incitación al odio y a la violencia.

96. A la comunidad internacional, incluida la Unión Africana y el sistema de las Naciones Unidas, la Comisión formula las recomendaciones siguientes:

a) Renovar por un año adicional el mandato de la presente Comisión;

b) Seguir vigilando la evolución de la situación de los derechos humanos en Burundi en el contexto de las elecciones de 2020 y, de conformidad con los principios de prevención y de alerta temprana, efectuar regularmente una evaluación de los riesgos a fin de permitir, en caso de empeoramiento, que se formulen y apliquen estrategias de respuesta adaptadas;

c) Hacer todo lo posible para asegurar la celebración de un diálogo interburundés inclusivo para resolver la crisis política;

d) Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los observadores electorales internacionales, regionales y nacionales;

e) Enviar observadores regionales o internacionales únicamente si su libertad de acción está garantizada en la práctica;

f) Asegurarse de que la ayuda humanitaria llegue íntegramente a la población;

g) Responder al llamamiento de apoyo financiero hecho por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en favor de los refugiados burundeses;

h) Asegurarse de que el seguimiento de las personas repatriadas se efectúe a lo largo de todo el proceso de manera más frecuente y transparente.

97. Más particularmente, la Comisión recomienda al sistema de las Naciones Unidas que, de conformidad con la iniciativa Los Derechos Humanos Primero, intensifique la promoción de los derechos humanos que forma parte de los mandatos propios de los organismos y programas pertinentes, al igual que la reunión y publicación de datos objetivos y fiables sobre la situación en Burundi.

98. A los Estados miembros del Consejo de Seguridad, la Comisión les recomienda que mantengan a Burundi en el programa de trabajo del Consejo, habida cuenta de los factores de riesgo identificados, e inviten a la Comisión a informarlos sobre sus conclusiones.

Annexes

Annexe I

Carte du Burundi



Annexe II

Correspondances avec le Gouvernement du Burundi

1. Lettre du Président de la Commission d'enquête, adressée à Son Excellence Monsieur Rénovat Tabu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi à Genève, en date du 26 février 2019



United Nations

Nations Unies

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

OHCHR • PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi/ TEL: +41 22 917 9313 • E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

Le 26 février 2019

REFERENCE: 2019/COI/BRD/Lettre/03

Excellence,

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à la résolution 39/14 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une présentation par la Commission d'Enquête sur le Burundi au Conseil des Droits de l'Homme est prévue pour le 12 mars prochain.

La Commission d'enquête Indépendante, dans le respect du principe de dialogue de son mandat, sollicite dans ce contexte, une rencontre avec vous, pour prendre note des informations pertinentes sur la situation des droits de l'homme au Burundi.

Veuillez accepter, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Diène'.

M. Doudou Diène
Président de la Commission d'enquête sur le Burundi

Son Excellence
Monsieur Rénovat Tabu
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
mission.burundi217@gmail.com

2. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 11 mars 2019

NATIONS UNIES
DROITS DE L'HOMME
HAUT-COMMISSARIAT



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION OF INQUIRY ON BURUNDI • COMMISSION D'ENQUETE SUR LE BURUNDI
PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi • TEL: +41 22 917 9313 • FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

REFERENCE: 2019/COI/BRD/NV/09

La Commission d'enquête sur le Burundi présente ses compliments à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et la prie de trouver ci-joint, la présentation orale qu'elle lira le 12 mars 2019 devant le Conseil des droits de l'homme.

La Commission d'enquête sur le Burundi saisit cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève les assurances de sa haute considération.



Genève, le 11 mars 2019

Mission permanente de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
Fax: +41 22 732 77 34
Email : mission.burundi217@gmail.com

3. **Lettre du Président de la Commission d'enquête adressée à Son Excellence Monsieur Rénovat Tabu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi à Genève, en date du 2 avril 2019**



United Nations

Nations Unies

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

OHCHR • PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi/ • TEL: +41 22 917 9313 • E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

Le 2 avril 2019

REFERENCE: 2019/COI/BRD/Lettre/10

Excellence,

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément au mandat qui lui a été donné par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par la résolution 39/14, la Commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi souhaite toujours établir un dialogue direct avec les autorités burundaises au sujet de ses enquêtes, la lutte contre l'impunité et l'amélioration immédiate de la situation des droits de l'homme dans le pays.

En conséquence, j'attire votre attention sur certaines questions qui nous paraissent importantes sur les violations et atteintes aux droits de l'homme commises au Burundi depuis avril 2015 et sur la situation actuelle des droits de l'homme dans le pays (voir annexe 1). Nous croyons que le gouvernement burundais a tout intérêt à y répondre afin de s'assurer que notre Commission puisse recueillir de manière directe et objective sa position ainsi que les informations à sa disposition concernant les atteintes aux droits de l'homme, notamment contre des agents de l'État. Un tel partage d'information nous permettrait d'inclure d'avantage d'informations à ce sujet dans notre rapport final.

Comme mentionné lors de notre présentation orale au Conseil des droits de l'homme le 12 mars 2019, nous incluons également une liste d'indicateurs des droits de l'homme, qui nous semblent les plus pertinents concernant la situation des droits de l'homme globale dans le pays. (voir annexe 2). Ces indicateurs, à la fois quantitatifs et qualitatifs, sont des outils opérationnels importants qui permettent aux autorités d'un pays d'évaluer de manière objective leurs politiques visant à protéger et réaliser progressivement les droits de l'homme et donner une première mesure du respect de ceux-ci au niveau du pays.

Son Excellence
Monsieur Rénovat Tabu
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
mission.burundi217@gmail.com



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 2

Comme dans mes correspondances précédentes, je vous réitère la disponibilité de la Commission pour un dialogue permanent et ouvert avec les autorités burundaises. À ce propos, je souhaiterais avoir l'honneur de vous rencontrer, avec les autres membres de la Commission, lors de notre prochain séjour à Genève au mois de juillet 2019.

Veuillez accepter, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Diène".

M. Doudou Diène
Président de la Commission d'enquête sur le Burundi



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 3

Annexe 1 - Questions sur la situation des droits de l'homme au Burundi

Pouvez-vous nous transmettre toutes les informations et données à votre disposition concernant :

- les incidents sécuritaires et les exactions commises sur le territoire du Burundi et des pays voisins dans lesquels l'implication des groupes armés d'opposition burundais est présumée ;
- les enquêtes et poursuites judiciaires dans les cas d'atteintes aux droits de l'homme et celles contre des membres présumés de ces groupes armés burundais d'opposition ;
- le nombre et l'état des enquêtes ouvertes dans les cas de violation des droits de l'homme, notamment ceux identifiés par notre commission ainsi que ceux des poursuites judiciaires contre les principaux auteurs présumés de telles violations ;
- les mesures prises pour enquêter sur les allégations de disparitions forcées, y compris afin de rechercher, localiser et libérer les personnes disparues et, en cas de décès, d'exhumer, identifier les personnes disparues et restituer leurs restes ;
- les mesures prises pour garantir que les collectes des contributions pour les élections de 2020 soient faites sur une base légale et réellement volontaire et sans recourir à des actes d'intimidation ou de coercition.
- les organisations non-gouvernementales étrangères qui n'ont pas été ré-accréditées à ce jour en vertu de la loi no. 1/01 du 23 janvier 2017, ainsi que les raisons pour lesquelles l'accréditation a été refusée ;
- les mesures prises pour garantir l'indépendance objective des institutions nationales des droits de l'homme, notamment leur indépendance structurelle et financière, ainsi que les moyens et les méthodes de travail qui leur permettent de travailler de manière indépendante ;
- les mesures prises pour garantir les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, d'information, d'association et de réunion pacifique, ainsi que l'existence d'un pluralisme politique, qui sont essentiels à l'organisation d'élections qui soient réellement démocratiques, libres et crédibles ;
- Les mesures prises afin de garantir la protection des burundais qui ont décidé volontairement de rentrer au Burundi après avoir pris refuge à l'étranger, notamment contre les possibles exactions commises à leur encontre par les autorités locales et les Imbonerakure, et les mesures pour faciliter leur réintégration dans leurs communautés d'origine.



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 4

Annexe 2 - Liste non exhaustive d'indicateurs des droits de l'homme

Ces indicateurs sont extraits de la publication « Indicateurs des droits de l'homme, Guide pour mesurer et mettre en œuvre, publiée par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, HR/PUB/12/5, tels que mis à jour par le HCDC et qui seront publiés prochainement. La liste des indicateurs n'est pas exhaustive, mais limitée à ceux considérés comme particulièrement pertinents pour une évaluation objective par les autorités burundaises de leurs politiques en matière de promotion et le respect des droits de l'homme au Burundi depuis 2015 (« période considérée » à laquelle il est fait référence dans les indicateurs). Cependant, de tels indicateurs ne doivent pas être vus « comme se substituant aux évaluations judiciaires, qualitatives et plus approfondies qui continueront à constituer la clé de voûte du contrôle du respect des droits de l'homme ».

1) Indicateurs concernant le droit à la liberté et à la sûreté de la personne**a) Indicateurs structurels**

- Existence d'institutions nationales des droits de l'homme qui soient conformes aux principes de Paris.

b) Indicateurs de processus :

- Proportion des plaintes concernant le droit à la liberté et à la sûreté de la personne reçues, instruites et réglées par l'institution nationale des droits de l'homme, le médiateur ou d'autres mécanismes et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu.
- Proportion de personnes arrêtées/détenues bénéficiant d'un accès à un avocat ou d'une aide juridictionnelle.
- Nombre de cas où la détention avant jugement ou en attente de jugement a dépassé la durée fixée par la loi pendant la période considérée.
- Proportion des responsables de l'application des lois ayant fait l'objet d'une enquête officielle pour un abus ou un crime physique ou non physique, y compris une arrestation ou une détention arbitraire.
- Proportion des enquêtes officielles menées à l'encontre de responsables de l'application des lois qui ont débouché sur des mesures disciplinaires ou des poursuites judiciaires pendant la période considérée.
- Proportion de policiers et des autres responsables de l'application des lois en uniforme portant des badges d'identité visibles (indiquant par exemple leur nom ou matricule).
- Nombre de personnes arrêtées, jugées, condamnées ou purgeant une peine pour crime violent pour 100.000 personnes pendant la période considérée.
- Proportion des victimes de violence au cours des 12 derniers mois qui ont rapporté leur victimisation aux autorités compétentes ou à un autre mécanisme de résolution des conflits reconnu officiellement.

c) Indicateurs de résultats :

- Nombre de détentions pour 100.000 personnes auxquelles il a été procédé sur décision de justice ou par suite d'une mesure prise par les autorités exécutives.
- Cas signalés de détention arbitraire, y compris après jugement, pendant la période considérée.
- Proportion des détenus à titre provisoire au sein de la population carcérale.



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 5

- Proportion des arrestations et de détentions déclarées illégales par les tribunaux nationaux.
- Proportion des victimes remises en liberté et ayant bénéficié d'une indemnisation à la suite d'une détention déclarée illégale par l'autorité judiciaire.
- Proportion de la population qui ne se sent pas en sécurité (par exemple, en marchant seule après la tombée de la nuit ou seule chez elle la nuit).
- Incidence et prédominance des abus ou crimes physiques et non physiques, y compris commis par des responsables de l'application des lois dans l'exercice de leurs fonctions, pour 100.000 personnes, pendant la période considérée.
- Proportion de la population qui a subi de la violence physique, psychologique ou sexuelle au cours des 12 derniers mois.
- Nombre de cas vérifiés de meurtres, enlèvements, disparitions forcées, détentions arbitraires et torture de journalistes, personnel associé aux médias, syndicalistes et défenseurs des droits de l'homme au cours des 12 derniers mois.

2) Indicateurs concernant le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines et des traitements inhumains, cruels ou dégradants

a) Indicateurs structurels

- Date d'entrée en vigueur et champ d'application de la procédure officielle régissant l'inspection des cellules de police, centres de détention et prisons par des institutions d'inspections indépendantes.
- Existence d'institutions nationales des droits de l'homme qui soient conformes aux principes de Paris.

b) Indicateurs de processus

- Proportion des plaintes concernant le droit à ne pas être torturé reçues, instruites et réglées par l'institution nationale des droits de l'homme, le médiateur ou d'autres mécanismes et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu.
- Proportion des personnes détenues ou emprisonnées dans des établissements inspectés par un organisme indépendant pendant la période considérée.
- Proportion du personnel carcéral et des responsables de l'application des lois ayant officiellement fait l'objet d'une enquête pour abus ou crime physique ou non physique, commis sur des personnes détenues ou emprisonnées (notamment pour des actes de torture ou une utilisation disproportionnée de la force) pendant la période considérée.
- Proportion des enquêtes officielles menées auprès de membres du personnel carcéral et des responsables de l'application des lois qui ont débouché sur une mesure disciplinaire ou des poursuites.
- Taux effectif d'occupation des prisons par rapport à leur capacité, établi conformément aux instruments des Nations Unies concernant les conditions de détention.
- Proportion des personnes détenues et emprisonnées dans des locaux satisfaisant aux critères prévus par la loi (notamment en ce qui concerne l'eau potable, le volume d'air, la superficie minimale, le chauffage).
- Nombre de surveillants et membres du personnel carcéral par détenu.
- Proportion des centres de détention et de prisons dont les installations permettent de séparer les personnes détenues ou emprisonnées (selon le sexe, l'âge, l'accusation, la condamnation, l'affaire pénale, la santé mentale, etc).
- *Voir aussi les indicateurs concernant les violences contre les femmes.*



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 6

c) Indicateurs de résultat

- Incidence et prédominance des décès, lésions et des maladies transmissibles et non transmissibles (VIH/sida, paludisme et tuberculose par exemple) survenus pendant la détention.
- Proportion des personnes détenues, mises au secret ou placées en régime cellulaire prolongé.
- Proportion des personnes détenues ou emprisonnées dont l'indice de masse corporelle (IMC) est inférieur à 18,5.
- Proportion de la population qui a subi de la violence physique, psychologique ou sexuelle au cours des 12 derniers mois.
- Cas signalés de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés par un agent de l'État ou par toute personne agissant sous son autorité ou avec la complicité, la tolérance ou le consentement de cet agent, sans aucun procès en bonne et due forme pendant la période considérée.
- Proportion des victimes de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ont bénéficié d'une indemnisation et d'une réhabilitation pendant la période considérée.

3) Indicateurs concernant les violences contre les femmes**a) Indicateurs structurels**

- Nombre d'ONG enregistrées ou actives et d'emplois à plein temps équivalents (pour 100.000 personnes) s'occupant de la protection des femmes contre les violences.
- Date d'entrée en vigueur et champ d'application de la législation protégeant l'égalité entre les genres et la possibilité pour les femmes de mettre fin à des relations marquées par la violence (par exemple droit égal à l'héritage, possession d'actifs, divorce).
- Date d'entrée en vigueur et champ d'application de la législation définissant le viol en référant à l'absence de consentement et non à l'usage de la force.
- Période et champ d'application de la politique contre la violence communautaire et les abus commis par les forces de l'ordre.

b) Indicateurs de processus

- Proportion des plaintes concernant toutes les formes de violence à l'égard des femmes reçues, instruites et réglées par l'institution nationale des droits l'homme, le médiateur ou d'autres mécanismes et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu.
- Proportion des dépenses du secteur social public consacrées à des campagnes nationales de sensibilisation à toutes les formes de violences à l'égard des femmes et à des programmes de prévention nationaux intégrés dans les programmes scolaires.
- Nombre d'auteurs de violence contre les femmes arrêtés, jugés condamnés et purgeant leurs peines (par type de peine).
- Proportion de femmes qui ont signalé des formes de violence domestique à des responsables de l'application des lois ou qui ont engagé une action en justice.
- Proportion des hommes et des femmes qui pensent que les abus ou les violences contre les femmes sont acceptables ou tolérables.
- Proportion de crimes à caractère sexuel signalés à la police (enquête auprès de la population).



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 7

- Proportion des responsables de l'application des lois ayant fait l'objet d'une enquête officielle pour des cas de violence contre les femmes qui ont débouché sur des sanctions disciplinaires ou des poursuites.
- Proportion de professionnels de la santé formés à la prise en charge et au soutien des victimes de violences sexuelles ou d'autres violences.
- Proportion des victimes de violences sexuelles ou d'autres violences qui ont eu accès aux services médicaux, psychologiques et juridiques appropriés.
- Proportion des cas signalés de violence sexuelles ou d'autres violences au titre desquels les victimes (ou des tiers concernés) ont engagé une action en justice.
- Proportion des dépenses consacrées à l'aide de secours et d'urgence destinée au bien-être des femmes et des enfants.

c) Indicateurs de résultat

- Proportion des femmes ou des hommes qui déclarent ne pas se sentir en sécurité dans des lieux publics ou qui limitent leurs activités pour des raisons de sécurité ou en raison d'un harcèlement.
- Proportion des femmes qui ont été victimes de violences physiques, d'un viol ou d'une agression sexuelle au cours de l'année.
- Cas signalés de décès, de viol (ou tentative de viol) et d'autres incidents de violence contre les femmes qui se sont produits dans des situations d'urgence, de conflit ou d'après conflit.
- Taux de meurtre de femmes.
- Taux de suicide par sexe.

4) Indicateurs concernant le droit à la vie

a) Indicateurs structurels

- Existence d'institutions nationales des droits de l'homme qui soient conformes aux principes de Paris.
- Date d'entrée en vigueur et champ d'application d'un système de coroners (médecins légistes) et d'un système de certification de la cause du décès.
- Date d'entrée en vigueur et champ d'application de la procédure officielle régissant l'inspection des cellules de prison, centres de détention et prisons par des organismes d'inspection indépendants.

b) Indicateurs de processus

- Proportion des responsables de l'application des lois et du personnel pénitentiaire formés aux règles de conduite relatives à l'utilisation proportionnée de la force, l'arrestation, la détention, l'enquête et le traitement des personnes en détention.
- Proportion des responsables de l'application des lois qui ont fait l'objet d'une enquête officielle pour des abus ou crime physique ou non physique ayant entraîné la mort ou menacé la vie pendant la période considérée.
- Proportion des enquêtes officielles menées auprès de responsables de l'application des lois qui ont débouché sur des mesures disciplinaires ou des poursuites pendant la période considérée.
- Ratio des personnes présentées officiellement aux autorités responsables de l'application des lois (c'est-à-dire soupçonnées, arrêtés ou ayant reçu un avertissement) en raison de privations arbitraires de la vie ou d'homicides présumés (intentionnels et non intentionnels) par rapport au nombre de cas signalés.



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 8

- Proportion des personnes présentées officiellement aux autorités responsables de l'application des lois en raison de privations arbitraires de la vie ou d'homicides présumés (intentionnels et non intentionnels) qui ont été condamnées.
- Proportion des auteurs identifiés de cas signalés de privation arbitraire de la vie, poursuivis, arrêtés, jugés, condamné ou qui accomplissent leur peine pendant la période considérée.
- Proportion des communications transmises par le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires auxquelles le gouvernement a effectivement répondu pendant la période considérée.
- Proportion des cas où la détention avant jugement a dépassé la durée fixée par la loi.
- Ratio des personnes présentées officiellement aux autorités responsables de l'application des lois en raison de disparitions ou d'enlèvements présumés par rapport au nombre de cas signalés.
- Proportion des personnes présentées officiellement aux autorités responsables de l'application des lois en raison de disparitions ou d'enlèvements présumés qui ont été condamnées.

c) Indicateurs de résultat

- Taux d'homicides (intentionnels et non intentionnels) pour 100.000 personnes.
- Nombre de décès en détention pour 1.000 personnes détenues ou emprisonnées par cause de décès (par exemple, maladie, suicide, homicide).
- Cas signalés de privation arbitraire de la vie et de menaces de mort.
- Cas signalés de disparition (par exemple, tels que signalés au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires).
- Proportion des cas de disparitions élucidés, selon la situation de la personne à la date d'élucidation (en liberté, en détention ou décédée).

5) Indicateurs concernant le droit à prendre part à la direction des affaires publiques

a) Indicateurs structurels

- Existence d'institutions nationales des droits de l'homme qui soient conformes aux principes de Paris.
- Nombre d'ONG enregistrées ou actives et d'emplois à plein temps équivalents (pour 100.000 personnes) s'occupant de la promotion et de la protection du droit à prendre part à la direction des affaires publiques.

b) Indicateurs de processus

- Proportion de la population en âge de voter inscrite sur les listes électorales.
- Irrégularités signalées (intimidation, corruption ou ingérence arbitraire) lors des inscriptions sur les listes électorales, de leur mise à jour et de leur révision.
- Nombre de plaintes par poste élu qui ont été enregistrées et traitées dans le cadre du processus électoral par les autorités nationales et infranationales compétentes.
- Part des dépenses publiques consacrées aux élections nationales et infranationales qui a été affectée à des programmes d'éducation des électeurs et à des campagnes d'inscriptions sur les listes électorales.
- Nombre de partis politiques enregistrés ou reconnus au niveau national.
- Proportion de la population en âge de voter qui n'est membre d'aucun parti politique.



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 9

c) **Indicateurs de résultat**

- Taux moyen de participation aux élections nationales et locales, par sexe et par groupe cible.
- Proportion des votes blancs et nuls lors des élections nationales et infranationales.
- Cas signalés de refus d'accès à un service ou à un poste public pour des raisons de discrimination.
- Proportion de personnes qui ont eu au moins un contact avec un agent public et qui a payé un pot-de-vin à un agent public ou à qui un agent public a demandé de payer un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents.
- Proportion de la population qui est satisfaite de son expérience la plus récente avec les services publics.

6) **Indicateurs concernant le droit à la non-discrimination et à l'égalité**a) **Indicateurs structurels**

- Nombre d'ONG enregistrées ou actives et d'emplois à plein temps équivalents (pour 100.000 personnes) s'occupant de la promotion et de la protection du droit à la non-discrimination.

b) **Indicateurs de processus**

- Proportion des établissements d'enseignement proposant à tous les niveaux une éducation aux droits de l'homme et prônant la compréhension entre les groupes de population (par exemple, les groupes ethniques).

c) **Indicateurs de résultat**

- Cas signalés de meurtre, détention arbitraire, disparition et torture subis par des groupes de population risquant généralement d'être victimes d'un traitement discriminatoire.
- Proportion des postes importants (par exemple de direction) occupés dans les secteurs publics et privés par les groupes cibles.
- Nombre signalé de victimes de discrimination directe et indirecte et de crimes motivés par la haine et proportion des victimes (ou de parents) qui ont bénéficié d'une indemnisation et d'une réhabilitation pendant la période considérée.
- Proportion de la population qui a rapporté s'être sentie personnellement discriminée ou harcelée au cours des 12 derniers mois sur la base d'un des motifs de discrimination interdit par le droit international des droits de l'homme.

7) **Indicateurs concernant le droit à la liberté d'opinion et d'expression**a) **Indicateurs structurels**

- Date d'entrée en vigueur et champ d'application des textes législatifs internes interdisant les appels à la haine nationale, raciale, religieuse ou sexiste constituant une incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence.
- Date de création d'un mécanisme de contrôle indépendant (par exemple un commissaire à l'information).
- Nombre d'ONG enregistrées ou actives et d'emplois à plein temps équivalents (pour 100.000 personnes) participant à la promotion et de la protection du droit à la liberté d'expression.

b) **Indicateurs de processus**



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 10

- Proportion des plaintes concernant le droit à la liberté d'expression reçues, instruites et réglées par l'institution nationale des droits de l'homme, le médiateur et d'autres mécanismes et proportion des plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu.
- Nombre de journaux, magazines, stations de radio, émission de télévision, sites internet par propriétaire (public ou privé) et chiffres d'audience.
- Nombre de journaux, articles, sites internet et autres émission de médias interdits ou censurés par les autorités réglementaires.
- Proportion de plaintes déposées par des journalistes ou tout autre professionnel des médias instruites, réglées et approuvées par les tribunaux et d'autres mécanismes compétents.
- Nombre des médias de groupes ethniques, religieux ou de minorités linguistiques reconnus par l'Etat ou bénéficiant d'une aide publique.
- Proportion des demandes d'autorisation de manifester acceptées par les autorités administratives.
- Proportion des poursuites judiciaires ou quasi judiciaires, engagées en raison d'appels à la haine nationale, raciale, religieuse ou sexiste, ayant entraîné l'ouverture d'une enquête et débouché sur une condamnation.

c) Indicateurs de résultat

- Nombre de journalistes ou d'autres professionnels des médias ayant signalé des sanctions ou des pressions du pouvoir politique ou de leurs entreprises en raison de la publication d'informations.
- Cas signalés de non divulgation de documents, archives et données administratives ou de données d'entreprises sur un sujet d'intérêt général (par exemple, dossiers judiciaires, exportations d'armes, données environnementales, demandeurs d'asile).
- Cas signalés d'assassinat, de disparition, de détention et de torture de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme ou de toute autre personne qui exerçait son droit à la liberté d'expression, perpétrés par un agent de l'État ou par toute autre personne agissant sous son autorité ou avec la complicité, la tolérance ou le consentement de cet agent, sans procès en bonne et due forme.

8) Indicateurs concernant le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique

a) Indicateurs structurels

- Date d'établissement et champ d'application des mécanismes nationaux de contrôle indépendants afin de protéger et promouvoir le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique.
- Nombre d'individus, d'associations - enregistrées ou non - et d'entités légales impliqués dans la protection et promotion du droit à la liberté d'association et de réunion pacifique.

b) Indicateurs de processus

- Nombre de manifestations et réunions tenues au cours de la période considérée, et proportion de celles auxquelles ont assisté des observateurs extérieurs tels que des défenseurs des droits de l'homme ou des journalistes, et proportion de celles pour lesquelles une autorisation préalable était requise.
- Proportion des officiers de police entraînés au maintien de l'ordre public selon les standards des droits de l'homme en la matière.



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 11

- Nombre d'agents de l'État impliqués dans le maintien de l'ordre lors de manifestations qui ont fait l'objet d'une enquête officielle pour des violations de droits de l'homme, des crimes ou des abus contre les manifestants, et proportion de ceux qui ont fait l'objet de sanctions, de mesures disciplinaires, de poursuites pénales ou ont été condamnés.
- Proportion des actions judiciaires contre des associations pour des cas présumés de diffamation ou calomnie, qui ont été instruites et ont résulté en des amendes ou d'autres sanctions.

c) Indicateurs de résultat

- Nombre de manifestations ou de réunions interdites ou restreintes au cours de la période considérée et les raisons de ces décisions.
- Nombre d'arrestations de manifestants, par charge retenue.
- Proportion de la population affiliée à au moins une association.
- Cas rapportés de censure ou d'interférence de l'État dans l'accès aux informations en ligne.
- Proportion des associations qui rapportent leur satisfaction quant à leur capacité à opérer, par secteur.
- Nombre d'associations - enregistrées ou non - et d'emplois à plein temps équivalents (pour 100.000 personnes).
- Nombre /proportion (par secteur) d'association fermées, dissoutes ou suspendues.
- Cas rapportés d'interférence par l'État dans les objectifs, règles, adhésion, communications, financement ou opérations des associations, par secteur.

9) Indicateurs concernant le droit à un procès équitable

a) Indicateurs structurels

- Nombre d'ONG enregistrées ou actives et d'emplois à plein temps équivalents (pour 100.000 personnes) s'occupant de la promotion et de la protection du droit à un procès équitable.
- Période et champ d'application de la politique nationale relative aux services judiciaires, notamment au renforcement des moyens des tribunaux pour lutter contre l'extorsion, les pots de vin ou la corruption.
- Période et champ d'application de la politique nationale relative à la mise à disposition d'une aide juridictionnelle en faveur des groupes spécifiques de la population.
- Age légal de la responsabilité pénale.

b) Indicateurs de processus

- Proportion des crimes (par exemple, viol, agression physique, violence domestique) signalés à la police (enquête de victimisation).
- Proportion des victimes de crimes dont les cas sont transmis à la justice par la police qui confirment l'accusation ou qui comparaissent devant le tribunal ou les procureurs.
- Part des dépenses publiques consacrée aux tribunaux et au ministère public.
- Salaire moyen des personnes exerçant des fonctions judiciaires exprimé en pourcentage des salaires minimaux réglementés.
- Cas signalés d'assassinat, de voies de fait, de menaces ou de licenciement abusif à l'encontre des personnes occupant de fonctions judiciaires.
- Proportion des accusés qui ont eu accès aux services appropriés, à un avocat ou à une aide juridictionnelle, pour assurer leur défense.
- Proportion des affaires en cours et durée moyenne des procès au pénal.

4. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 18 Juin 2019

NATIONS UNIES
DROITS DE L'HOMME
HAUT-COMMISSARIAT



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION OF INQUIRY ON BURUNDI • COMMISSION D'ENQUETE SUR LE BURUNDI
PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi • TEL: +41 22 917 9313 • FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

REFERENCE: 2019/COI/BRD/NV/28

La Commission d'enquête sur le Burundi présente ses compliments à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et souhaite l'informer que ses trois Commissaires : M. Doudou Diène (Président), Mme Françoise Hampson et Mme. Lucy Asuagbor (membres) seront à Genève pour leur présentation orale à la quarante et unième session du Conseil des droits de l'homme qui aura lieu le 2 Juillet 2019.

La Commission saisit cette opportunité pour solliciter une rencontre avec son Excellence Monsieur Rénovat Tabu, Représentant permanent du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour discuter des questions relatives aux travaux de la Commission. La Commission propose une rencontre le lundi 1 juillet 2019 à 10:00. Toute communication à cet égard, notamment pour convenir d'un lieu de rencontre qui soit mutuellement acceptable peut être adressée à notre secrétariat : Mme Françoise Kenfack, assistante administrative, courriel: fkenfack@ohchr.org.

La Commission saisit également cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève les assurances de sa haute considération.



Genève, le 18 Juin 2019

Mission permanente de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
Email : mission.burundi217@gmail.com

5. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 1^{er} juillet 2019

NATIONS UNIES
DROITS DE L'HOMME
HAUT-COMMISSARIAT



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION OF INQUIRY ON BURUNDI • COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI
PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ColBurundi • TEL: +41 22 917 9313 • FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

REFERENCE: 2019/COI/BRD/NV/31

La Commission d'enquête sur le Burundi présente ses compliments à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et la prie de trouver ci-joint, la présentation orale qu'elle lira le 2 Juillet 2019 devant le Conseil des droits de l'homme.

La Commission d'enquête sur le Burundi saisit cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève les assurances de sa haute considération.



Genève, le 1^{er} juillet 2019

Mission permanente de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
Fax: +41 22 732 77 34
Email : mission.burundi217@gmail.com

Annexe III

Recommandations antérieures faites par la Commission

1. Recommandations faites en 2018

Version française

100. La Commission recommande au Gouvernement burundais, comme mesures prioritaires:

- a) De mettre immédiatement un terme aux violations graves des droits de l'homme commises par des agents de l'État et des Imbonerakure ;
- b) D'établir, avec le soutien de la communauté internationale, des mécanismes ad hoc chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de poursuivre les auteurs de crimes de droit international qui ne font pas l'objet d'une enquête par la Cour pénale internationale;
- c) D'établir, avec le soutien de la communauté internationale, une entité indépendante chargée de faire la lumière sur les cas de disparition signalés depuis avril 2015, de localiser les possibles fosses communes, d'exhumer et d'identifier les corps ;
- d) De prendre des mesures pour que les victimes de torture et les femmes ayant subi des violences sexuelles aient accès à des soins appropriés, en particulier un libre accès à tous les soins de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à un soutien psychologique ;
- e) D'appliquer les Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- f) De contrôler les hausses des prix, en particulier en revoyant l'augmentation des taxes et des impôts qui porte atteinte au droit à un niveau de vie suffisant de la population, et en supprimant les contributions qui touchent disproportionnellement les personnes les plus pauvres ;
- g) De coopérer avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, notamment :
 - h) En accueillant à nouveau des missions de procédures spéciales ;
 - ii) En mettant en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel, des organes conventionnels et des procédures spéciales, notamment en établissant un mécanisme national d'élaboration des rapports et de suivi ;
 - i) D'autoriser le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à reprendre sans entrave l'ensemble de ses activités au Burundi ;
 - j) De signer et de mettre en œuvre le mémorandum d'entente avec l'Union africaine et de permettre le déploiement complet des 100 observateurs des droits de l'homme.

101. La Commission recommande également au Gouvernement burundais, à moyen et plus long termes :

- a) De réviser la loi organique du 8 mars 2018 portant révision de la loi no 01/03 du 24 janvier 2013 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication afin de garantir l'indépendance de ce dernier ;
- b) De ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
- c) De réviser les dispositions du Code de procédure pénale pour les mettre en conformité avec les normes internationales, en particulier les dispositions relatives aux délais de garde à vue et de contrôle de la détention, aux perquisitions de nuit et sans

mandat, à la procédure de « flagrante », à l'infraction d'« atteinte à la sûreté intérieure de l'État », et à celles accordant une impunité de jure aux magistrats et aux officiers de police judiciaire ;

d) De mettre fin aux détentions arbitraires et d'améliorer les conditions de détention :

- En appliquant les Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
- En garantissant le contrôle de la légalité des détentions et leur conformité avec les droits de l'homme.

(e) Faute d'un système judiciaire indépendant et performant, de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale dans l'enquête qu'elle a ouverte le 25 octobre 2017;

(f) D'engager une réforme en profondeur du système judiciaire afin de garantir son indépendance, son impartialité et son effectivité, notamment:

- i) En appliquant les Directives et les Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
- ii) En publiant les conclusions des états généraux de la justice de 2013 et en réunissant les acteurs du secteur et les partenaires internationaux pour discuter des mesures de suivi;
- iii) En augmentant le budget du secteur de la justice et en garantissant son autonomie de gestion;
- iv) En revalorisant la rémunération des magistrats des juridictions ordinaires ainsi que les moyens et l'équipement à leur disposition;
- v) En informatisant les greffes;
- vi) En revoyant la composition du Conseil supérieur de la magistrature afin que ses membres soient en majorité désignés par leurs pairs;
- vii) En revoyant les procédures de nomination, d'affectation, de notation et d'avancement des magistrats afin qu'elles ne dépendent pas du pouvoir exécutif;
- viii) En veillant au respect strict du principe d'inamovibilité des magistrats du siège;
- ix) En protégeant et en garantissant l'indépendance du système judiciaire en interdisant toute ingérence dans le fonctionnement de la justice par des autorités gouvernementales, des membres du parti au pouvoir ou par des membres des corps de défense et de sécurité, et en prenant des sanctions contre ceux qui influencent, ou cherchent à influencer, le fonctionnement de la justice;
- x) En développant des programmes d'aide juridictionnelle pour les plus vulnérables;
- xi) En renforçant les mécanismes de protection de victimes et de témoins, ainsi que leur efficacité, pour restaurer la confiance de la population et pour encourager les témoins à s'exprimer sans crainte pour leur sécurité.

(g) De mettre en place, en consultation avec les bénéficiaires, un programme de réparations des victimes des violations des droits de l'homme qui comprenne des réparations matérielles, symboliques, individuelles et collectives, et qui ne soit pas dépendant de la condamnation des auteurs;

(h) D'établir le fond étatique pour les victimes de torture prévu par la loi et en conformité avec l'Observation générale no 4 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 5);

(i) D'établir un fond pour l'indemnisation des victimes de détention arbitraire et illégale;

(j) De réformer le secteur de la sécurité:

- i) En s'assurant que des éléments extérieurs n'accomplissent pas des activités de défense ou de sécurité;
- ii) En délimitant clairement les rôles des différents corps de défense et de sécurité, en particulier du SNR;
- iii) En suspendant les membres des corps de défense et de sécurité suspectés d'être impliqués dans des violations des droits de l'homme jusqu'au terme des enquêtes et des procédures judiciaires;
- iv) En établissant des procédures strictes et transparentes de sélection qui intègrent des mécanismes de vérification des antécédents;
- v) En renforçant le contrôle civil et démocratique des corps de défense et de sécurité, en particulier du SNR.

(k) De s'acquitter de ses obligations internationales de respecter, de protéger et de garantir les droits économiques et sociaux:

- i) En élaborant et en mettant en œuvre les budgets de l'État de manière à utiliser au maximum les ressources disponibles pour assurer le respect des droits de l'homme à la population appauvrie par la crise politique, en particulier des droits à l'alimentation, à l'eau et à la santé, et pour développer des indicateurs désagrégés, y compris par genre, pour mieux informer ses politiques;
- ii) En entreprenant, en consultation avec les populations travaillant dans le secteur agricole, notamment les femmes, des réformes visant une meilleure protection des droits des femmes et une meilleure utilisation des terres pour l'agriculture, et en développant des perspectives de travail en dehors du secteur agricole;
- iii) En utilisant une approche fondée sur les droits de l'homme pour régler les conflits fonciers dont ceux touchant les personnes ayant fui le Burundi avant et après 2015;
- iv) En mettant fin à toute considération politique dans les processus de recrutement au sein de l'administration publique, des sociétés publiques et des sociétés mixtes.

102. La Commission recommande aux partis politiques et aux groupes armés d'opposition de s'abstenir de toute attaque sur le territoire burundais et de tout discours appelant à la violence, et de s'engager dans la recherche d'une solution durable à la crise politique.

103. La Commission recommande à l'Union africaine de donner une place importante, dans sa recherche d'une solution durable à la crise au Burundi, au respect des droits de l'homme et au rejet de l'impunité, tels que prévus par son Acte constitutif.

104. La Commission recommande aux partenaires techniques et financiers du Burundi:

a) De suspendre ou de maintenir la suspension de toute aide budgétaire directe au Gouvernement en l'absence de priorisation des ressources internes en faveur des objectifs de développement durable et des droits économiques et sociaux de la population, et de mesures effectives contre la corruption;

b) De cibler les dons et les financements attribués au Gouvernement sur des projets en faveur des besoins de la population et de s'assurer que ceux-ci sont gérés efficacement et de manière transparente;

c) D'évaluer régulièrement l'impact des sanctions financières sur la population burundaise.

105. La Commission recommande aux garants de l'Accord d'Arusha, en leur qualité d'acteurs engagés en faveur d'une paix durable au Burundi, de continuer à chercher une solution pérenne à la crise politique et des droits de l'homme qui préserve et garantit les acquis de l'Accord d'Arusha.

Version anglaise

106. The Commission recommends that the Government of Burundi take the following measures as a matter of priority:

a) Put an immediate end to the gross human rights violations being committed by agents of the State and Imbonerakure;

b) With the support of the international community, establish ad hoc mechanisms with a mandate to investigate human rights violations and to prosecute perpetrators of international crimes that are not being investigated by the International Criminal Court;

c) With the support of the international community, establish an independent body with a mandate to investigate the cases of disappearance reported since April 2015, locate potential mass graves, and exhume and identify the remains;

d) Take measures to ensure that victims of torture and women survivors of sexual violence have access to appropriate care, including free access to all sexual and reproductive health services and to psychological support;

e) Implement the Guidelines on Combating Sexual Violence and its Consequences in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights;

f) Control price increases, in particular by reviewing duty and tax increases that are undermining the population's right to an adequate standard of living and by abolishing contributions that disproportionately affect the poorest sectors;

g) Cooperate with international human rights mechanisms, in particular by:

- i) Resuming the practice of allowing special procedures mandate holders to conduct missions to Burundi;
- ii) Implementing the recommendations of the universal periodic review, treaty bodies and special procedures, including by establishing a national mechanism for reporting and follow-up.

h) Authorize the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to resume all its activities in Burundi without hindrance;

i) Sign and implement the memorandum of understanding with the African Union and permit the full deployment of the 100 human rights observers provided for therein.

107. For the medium and longer terms, the Commission also recommends that the Government of Burundi:

a) Amend the Organization Act of 8 March 2018 amending Act No. 01/03 of 24 January 2013 on the mandate, composition, organization and functioning of the National Communication Council with a view to ensuring the latter's independence;

b) Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance;

c) Amend the Code of Criminal Procedure to align its provisions with international standards, in particular the provisions on time limits for police custody and on oversight of detention, night-time and warrantless searches, the *flagrante delicto* procedure and the offence of “undermining the internal security of the State”, and provisions that grant de jure impunity to judges and to officers of the criminal investigation police (*police judiciaire*);

d) Put an end to arbitrary detention and improve conditions of detention by:

- i) Implementing the Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-Trial Detention in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples’ Rights;
- ii) Ensuring that detention is subject to oversight measures for assessing its legality and compatibility with human rights.

e) In the absence of an independent and efficient judicial system, cooperate fully with the International Criminal Court in the investigation opened on 25 October 2017;

f) Undertake an in-depth reform of the judicial system to ensure its independence, impartiality and effectiveness, including by:

- i) Implementing the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples’ Rights;
- ii) Publishing the conclusions of the national forum on the justice system held in 2013 and convening a meeting of justice-sector stakeholders and international partners to discuss follow-up action;
- iii) Increasing the budget for the justice sector and ensuring that it is managed autonomously;
- iv) Raising the pay levels of judges in the ordinary courts and increasing the resources and facilities available to them;
- v) Computerizing court registries;
- vi) Reviewing the composition of the Judicial Service Commission to ensure that the majority of its members are appointed by their peers;
- vii) Reviewing procedures for the appointment, assignment, evaluation and promotion of judges to ensure that such procedures are not dependent on the executive branch;
- viii) Ensuring strict observance of the principle that judges should have security of tenure;
- ix) Protecting and safeguarding the independence of the judiciary by prohibiting any interference in the administration of justice by government authorities, members of the ruling party or members of the defence and security forces, and imposing penalties on anyone who influences or seeks to influence the administration of justice;
- x) Developing legal aid programmes for persons belonging to the most vulnerable groups;
- xi) Strengthening victim and witness protection mechanisms and improving their effectiveness in order to restore public trust and encourage witnesses to come forward without fear for their safety.

g) In consultation with the beneficiaries, establish a reparations programme for victims of human rights violations, ensuring that material, symbolic, individual and collective reparations are made available regardless of whether or not the perpetrators are convicted;

h) Establish the State fund for victims of torture provided for by law, in conformity with general comment No. 4 on the African Charter on Human and Peoples’

Rights, adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights, concerning the right to redress for victims of torture and other cruel, inhuman or degrading punishment or treatment (art. 5);

i) Establish a compensation fund for victims of arbitrary and unlawful detention;

j) Reform the security sector by:

- i) Ensuring that outsiders are not involved in defence or security activities;
- ii) Clearly defining the roles of the various defence and security forces, in particular the National Intelligence Service;
- iii) Suspending members of the defence and security forces who are suspected of involvement in human rights violations until the relevant investigations and judicial proceedings have concluded;
- iv) Establishing rigorous and transparent selection procedures that include vetting mechanisms;
- v) Strengthening democratic civilian control over the defence and security forces, in particular the National Intelligence Service.

(k) Meet its international obligations to respect, protect and fulfil economic and social rights by:

- i) Developing and implementing State budgets in such a way as to maximize the use of available resources to ensure that the human rights of the sectors impoverished by the political crisis are respected, in particular the rights to food, water and health care, and to develop indicators disaggregated by factors such as gender in order to better inform its policies;
- ii) In consultation with population groups working in the agricultural sector, including women, undertaking reforms with the aim of better protecting women's rights and making better use of land for agriculture, and developing employment opportunities outside the agricultural sector;
- iii) Taking a rights-based approach to the settlement of land conflicts, including those involving persons who fled Burundi either before or after 2015;
- iv) Ending the inclusion of any political considerations in hiring processes for the civil service, State enterprises and public-private enterprises.

108. The Commission recommends that political parties and armed opposition groups refrain from engaging in any attacks on Burundian territory and from any speech calling for violence, and that they join the effort to find a lasting solution to the political crisis.

109. The Commission recommends that the African Union, in its efforts to find a lasting solution to the crisis in Burundi, give priority to respect for human rights and the rejection of impunity, as provided for in its Constitutive Act.

110. The Commission recommends that the technical and financial partners of Burundi:

a) Suspend, or maintain the suspension of, any direct budget support to the Government until such time as priority is given to the allocation of domestic resources for the fulfilment of the Sustainable Development Goals and the economic and social rights of the population, and effective measures are taken against corruption;

b) Ensure that grants and financing provided to the Government are earmarked for projects to meet the population's needs, and ensure that such funding is managed effectively and transparently;

c) Regularly evaluate the impact of financial sanctions on the people of Burundi.

111. The Commission recommends that the guarantors of the Arusha Agreement, in their capacity as committed proponents of a lasting peace in Burundi, continue to seek a durable solution to the political and human rights crisis that will preserve and safeguard the achievements of the Arusha Agreement.

2. Recommandations faites en 2017

Version française

1. Aux autorités burundaises

112. De mettre immédiatement un terme aux violations graves des droits de l'homme commises par des agents de l'État et des Imbonerakure sur lesquels l'État exerce un contrôle;

113. D'enquêter sur ces violations et s'assurer que les auteurs présumés soient jugés dans les meilleurs délais, dans des procédures crédibles, indépendantes et équitables, et que les victimes obtiennent une juste réparation. Dans le cas où les auteurs présumés sont des agents de l'État, les suspendre jusqu'au terme de l'enquête et de la procédure judiciaire;

114. De prendre des mesures concrètes pour une amélioration rapide de la situation des droits de l'homme, notamment en:

- Annulant les mandats d'arrêt contre des dirigeants de médias, d'organisations de la société civile et de partis politiques qui n'ont pas utilisé ou prôné la violence, et permettant leur retour en toute sécurité au Burundi;
- Levant la suspension et la radiation des médias et organisations de la société civile, leur permettant de reprendre leurs activités en toute indépendance, et revoyant les lois adoptées en 2017 sur les organisations non-gouvernementales burundaises et internationales;
- Libérant immédiatement tous les prisonniers politiques;
- S'assurant que toute personne arrêtée soit détenue dans un lieu de détention officiel et que des observateurs nationaux et internationaux soient autorisés à leur rendre visite;
- Veillant à ce que les officiers de police judiciaire ne soient pas habilités à mener des perquisitions sans mandat et de nuit comme envisagé dans les projets d'amendement du Code pénal et du Code de procédure pénale;
- S'assurant que des individus qui n'y sont pas légalement habilités, en particulier des Imbonerakure, ne conduisent pas des activités de maintien de l'ordre ou n'y prennent pas part, y compris dans des lieux de détention, et qu'ils ne portent pas des uniformes militaires ou de police ou ne soient pas en possession d'armes;
- Poursuivant les auteurs de discours haineux ou appelant à la violence;
- Mettant fin aux menaces, intimidations et actes d'extorsion par des agents de l'État et des Imbonerakure;
- Permettant aux victimes de violences sexuelles et de torture d'avoir accès à des services médicaux et psychosociaux.

115. D'engager une réforme en profondeur du système judiciaire, notamment en:

- Publiant les conclusions des états généraux de la justice qui se sont tenus en 2013 à Gitega;
- Revoyant la composition du Conseil national de la magistrature afin que ses membres soient en majorité désignés par leurs pairs;
- Revoyant les procédures de nomination, d'affectation, de notation et d'avancement des magistrats afin qu'elles ne dépendent pas du pouvoir exécutif;
- Veillant au respect strict du principe d'inamovibilité des magistrats du siège;

- Protégeant et garantissant l'indépendance du système judiciaire en interdisant toute ingérence dans le fonctionnement de la justice par des autorités gouvernementales, des membres du parti au pouvoir ou des membres des corps de défense et de sécurité, et en prenant des sanctions contre ceux qui influencent, ou cherchent à influencer, le fonctionnement de la justice;
- Développant des programmes d'aide juridictionnelle pour les plus vulnérables;
- Renforçant les mécanismes de protection de victimes et de témoins, ainsi que leur efficacité, pour restaurer la confiance de la population et encourager les témoins à s'exprimer sans crainte pour leur sécurité.

116. De s'assurer que les membres des corps de défense et de sécurité respectent les droits de l'homme en toutes circonstances et servent les intérêts de la population dans son ensemble et pas uniquement ceux du parti au pouvoir, notamment en:

- Renforçant le contrôle civil des corps de défense et de sécurité et l'indépendance des organes chargés de ce contrôle créés par la Constitution, en particulier le Parlement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et l'Ombudsman;
- Remédiant à la carence constitutionnelle de contrôle civil du SNR;
- Prenant des mesures pour vérifier les antécédents, notamment en matière de droits de l'homme, des agents des corps de défense et de sécurité et intégrant ces mesures à une refonte des procédures de recrutement et d'avancement de ces agents.

117. De revenir sur sa décision de se retirer du Statut de Rome et coopérer pleinement avec la CPI dans la procédure d'examen préliminaire en cours et, si une enquête est ouverte, poursuivre cette coopération et assurer la protection des victimes et témoins;

118. D'autoriser le HCDH à reprendre ses activités de documentation des violations des droits de l'homme au Burundi, suspendues depuis octobre 2016;

119. De signer et mettre en œuvre le mémorandum d'entente avec l'Union africaine et permettre le déploiement complet des 100 observateurs des droits de l'homme et des 100 experts militaires, décidé en 2016;

120. De coopérer avec les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies en accueillant à nouveau des missions des procédures spéciales et en mettant en œuvre les recommandations récentes des organes de traité ;

121. De s'engager activement dans la voie d'une résolution durable de la crise politique, notamment dans le cadre d'initiatives de dialogue engagées au niveau international.

2. Aux partis politiques et groupes armés d'opposition

122. De mettre immédiatement un terme aux atteintes aux droits de l'homme et aux actes de violence commis par leurs membres;

123. De s'abstenir de tout discours appelant à la violence et s'engager dans la recherche d'une solution durable à la crise politique au Burundi.

3. Au Conseil des droits de l'homme

124. De prolonger le mandat de la Commission pour une durée d'un an aux fins d'approfondir et de poursuivre ses enquêtes en raison de la persistance des violations graves des droits de l'homme et des atteintes à ceux-ci et en l'absence d'autres mécanismes spécifiques en mesure de mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur la situation des droits de l'homme au Burundi;

125. De demander au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de faire un rapport sur l'évolution de sa coopération avec le Gouvernement du Burundi aux prochaines sessions du Conseil.

4. À la Cour pénale internationale

126. D'ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes commis au Burundi au vu des conclusions contenues dans le présent rapport et d'autres informations à sa disposition.

5. Au Conseil de sécurité des Nations Unies

127. De prendre dûment compte des présentes conclusions de la Commission et de la persistance de violations graves des droits de l'homme dans toute discussion sur le Burundi et, dans ce contexte, veiller à la mise en œuvre effective de la résolution 2303 (2016);

128. De saisir la CPI de tout crime de droit international qui serait commis au Burundi après le 27 octobre 2017;

129. De prendre des sanctions individuelles contre les principaux auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et de crimes de droit international au Burundi.

6. Au Secrétaire-général des Nations Unies

130. De veiller à ce que le respect des droits de l'homme et la restauration de l'État de droit soient parmi les priorités de son Envoyé spécial sur le Burundi;

131. De veiller à ce qu'aucun auteur présumé de violations des droits de l'homme ou de crimes de droit international au Burundi ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies.

7. Aux États membres des Nations Unies

132. D'accorder *prima facie* le statut de réfugié aux demandeurs d'asile burundais et veiller au respect strict du principe de non-refoulement, ainsi qu'à la protection des réfugiés;

133. De poursuivre, au titre de la compétence universelle, les auteurs présumés de crimes de droit international commis au Burundi se trouvant sur leur territoire;

134. De maintenir, en l'absence de toute amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays, les sanctions individuelles et la suspension de l'aide directe au Gouvernement burundais;

135. De fournir une assistance technique aux autorités burundaises, dans la mesure où ces dernières font preuve d'une véritable volonté politique, afin de mener des enquêtes crédibles et indépendantes, notamment en matière d'autopsie, d'exhumation et d'identification des corps;

136. De soutenir la mise en place de services médicaux et psychosociaux spécialisés, notamment pour les victimes de torture et de violences sexuelles;

137. De soutenir les autorités burundaises, si celles-ci font preuve d'une véritable volonté politique, dans tout effort de réforme du système judiciaire et du secteur de sécurité qu'elles voudront engager aux fins d'améliorer la situation des droits de l'homme.

8. À l'Union africain

138. De reprendre l'initiative dans la recherche d'une solution durable à la crise au Burundi fondée sur le respect des droits de l'homme et le rejet de l'impunité, tels que prévus par son Acte constitutif, et s'y engager activement;

139. De veiller à ce qu'aucun agent de l'État burundais accusé de violations des droits de l'homme ou de crimes de droit international ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix de l'Union africaine;

140. De s'assurer que l'équipe complète de ses observateurs des droits de l'homme et experts militaires soit rapidement déployée au Burundi;

141. D'envisager, en cas de persistance de la situation actuelle au Burundi, l'application de l'article 4 (h) de son Acte constitutif, autorisant l'Union africaine à intervenir dans un État membre dans certaines circonstances, notamment en cas de crimes contre l'humanité.

9. À la Communauté des États d'Afrique de l'Est

142. De s'assurer que l'amélioration rapide de la situation des droits de l'homme soit une priorité dans ses efforts de médiation.

10. Aux garants de l'Accords d'Arusha de 2000, en leur qualité d'acteurs engagés en faveur d'une paix durable au Burundi

143. De se réunir le plus rapidement possible en vue de trouver une solution pérenne à la crise politique et des droits de l'homme au Burundi.

Version anglaise

1. The Burundian authorities should:

144. Put an immediate end to the gross human rights violations being committed by agents of the State and Imbonerakure over which the State exercises control;

145. Investigate these violations, ensure that the alleged perpetrators are prosecuted promptly in accordance with credible, independent and fair procedures, and that the victims obtain just reparation, and, where the alleged perpetrators are agents of the State, suspend them from their duties pending the completion of the investigation and the judicial proceedings;

146. Take practical measures to bring about a rapid improvement of the human rights situation, in particular by:

- Withdrawing the warrants for the arrest of heads of media outlets, civil society organizations and political parties who have neither used nor advocated violence, and permitting their safe return to Burundi;
- Lifting the suspension and reversing the revocation of the licences of media and civil society organizations, permitting them to resume their activities with complete independence and reviewing the laws adopted in 2017 concerning non-profit organizations and foreign non-governmental organizations;
- Immediately releasing all political prisoners;
- Ensuring that every person arrested is detained in an official place of detention and that national and international observers are allowed to visit them;
- Ensure that criminal investigation officers (officiers de police judiciaire) are not authorized to conduct searches without a warrant, including at night, as envisaged in the draft amendments to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure;
- Ensuring that individuals lacking legal authorization, particularly the Imbonerakure, do not perform or participate in law enforcement activities, including in places of detention, and do not wear military or police uniforms or possess weapons;
- Prosecuting individuals who incite hatred or violence;
- Putting an end to threats, intimidation and acts of extortion by State officials and the Imbonerakure;
- Giving victims of sexual violence and torture access to medical and psychosocial services.

147. Undertake a thorough reform of the judiciary, in particular by:

- Publishing the conclusions of the General Convention on the Judiciary (États généraux de la justice) held in Gitega in 2013;

- Reviewing the composition of the Superior Council of Magistrates (Conseil supérieur de la magistrature) so that the majority of its members are designated by their peers;
- Reviewing the nomination, posting, evaluation and promotion procedures of magistrates so that they do not depend of the executive;
- Ensuring the respect of the principle of security of tenure for judges;
- Protecting and guaranteeing the independence of the judiciary by prohibiting all interference in their functions by governmental authorities, members of the ruling party or security and defence forces, and imposing sanctions on those who influence, or seek to influence, the functioning of the judiciary;
- Developing legal aid programmes for the most vulnerable;
- Reinforcing the protection mechanisms for victims and witnesses, as well as their efficiency, in order to restore people's confidence in the system and to encourage witnesses to testify without fear for their security.

148. Ensure that members of the defence and security forces respect human rights in all circumstances and serve the interests of the population as a whole, not solely those of the ruling party, in particular by:

- Reinforcing civilian control over the military and the independence of the competent organs created by the Constitution to supervise this control, in particular the Parliament, the National Human Rights Commission and the Ombudsman;
- Implementing civilian control over the National Intelligence Service (Service national de renseignement) in line with the Constitution;
- Conducting background checks, in particular on human rights, on defense and security forces and incorporating these measures into reforms of the recruitment and career progression of these agents.

149. Reconsider their decision to withdraw from the Rome Statute, cooperate fully with the International Criminal Court in the ongoing preliminary examination and, if an investigation is initiated, continue that cooperation, inter alia by ensuring the protection of victims and witnesses;

150. Authorize the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to resume its documentation of human rights violations in Burundi, which has been suspended since October 2016;

151. Sign and implement the memorandum of understanding with the African Union and permit the full deployment of 100 human rights observers and 100 military experts that was decided upon in 2016;

152. Cooperate with United Nations human rights mechanisms by once again receiving special procedures missions and implementing the recent recommendations of treaty bodies;

153. Actively seek a lasting solution to the political crisis, inter alia through international initiatives to promote dialogue.

2. Political parties and armed opposition groups should:

154. Put an immediate end to human rights abuses and acts of violence committed by their members;

155. Refrain from any incitement of violence and participate in the quest for a lasting solution to the political crisis in Burundi.

3 The Human Rights Council should:

156. Extend the Commission's mandate for a period of one year to enable it to conduct further and more thorough investigations in view of the persistence of gross human rights

violations and abuses and the absence of other specific mechanisms capable of undertaking independent and thorough investigations into the human rights situation in Burundi;

157. Request the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to report, at the forthcoming sessions of the Council, on the development of its cooperation with the Burundian Government.

4. The International Criminal Court should:

158. Initiate, as soon as possible, an investigation into the crimes committed in Burundi in light of the conclusions contained in the present report and other information at its disposal.

5. The United Nations Security Council should:

159. Take due account of the Commission's conclusions, as well as persistence of gross violations of human rights, in any discussion on Burundi and, in this context, ensure the effective implementation of resolution 2303 (2016);

160. Refer to the International Criminal Court any international crime that might be committed in Burundi after 27 October 2017;

161. Impose individual sanctions against the principal alleged perpetrators of gross human rights violations and international crimes in Burundi.

6. The Secretary-General of the United Nations should:

162. Ensure that respect for human rights and restoration of the rule of law are among the priorities of his Special Envoy for Burundi;

163. Ensure that no alleged perpetrator of human rights violations or international crimes in Burundi is recruited for United Nations peacekeeping missions.

7. The States Members of the United Nations should:

164. Grant prima facie refugee status to Burundian asylum seekers and ensure strict respect for the principle of non-refoulement and refugee protection;

165. Prosecute, in accordance with the principle of universal jurisdiction, alleged perpetrators of international crimes committed in Burundi who are found to be in their territory;

166. Maintain, in the absence of any improvement in the human rights situation in Burundi, the individual sanctions and the suspension of direct aid to the Government;

167. Provide technical assistance inter alia in respect to autopsies, exhumations and identification of bodies, to enable the Burundian to conduct credible and independent investigations;

168. Support the establishment of specialized medical and psychosocial services, especially for victims of torture and sexual violence;

169. Support Burundian authorities in any judicial and security sector reform endeavors that they might wish to undertake in order to improve the human rights situation.

8. The African Union should:

170. Retake the lead in seeking a lasting solution to the crisis in Burundi based on respect for human rights and rejection of impunity, as provided for in its Constitutive Act, and play an active role in that process;

171. Ensure that no agent of the Burundian State who is accused of human rights violations or international crimes is recruited for African Union peacekeeping missions;

172. Ensure that the full complement of African Union human rights observers and military experts is deployed rapidly in Burundi;

173. Consider, in the event that the current situation in Burundi persists, the application of Article 4 (h) of the Constitutive Act of the African Union, under which it is authorized to intervene in a member State in certain circumstances, particularly in the event of crimes against humanity.

9. The East African Community should:

174. Ensure that a rapid improvement of the human rights situation is a priority in its mediation efforts.

10. The guarantors of the 2000 Arusha Agreement, in their capacity as committed proponents of a lasting peace in Burundi, should:

175. Meet with a view to finding a lasting solution to the political and human rights crisis in Burundi.

Annexe IV

Indicateurs des facteurs de risque communs identifiés dans le Cadre d'analyse des atrocités criminelles (A/70/741–S/2016/71)

Version française

Facteur de risque 1. Situations de conflit armé ou autres formes d'instabilité

- a) Conflit armé international ou non international;
- (b) Crise sécuritaire provoquée, entre autres, par la dénonciation d'accords de paix, un conflit armé dans les pays voisins, des menaces d'interventions étrangères ou des actes de terrorisme;
- c) Crise ou urgence humanitaire, pouvant être causée notamment par une catastrophe naturelle ou une épidémie;
- d) Instabilité politique provoquée par un changement de régime ou un transfert de pouvoir soudain ou irrégulier;
- e) Instabilité politique provoquée par des luttes de pouvoir ou la montée en puissance de mouvements d'opposition nationalistes, armés ou radicaux;
- f) Tension politique provoquée par des régimes autocratiques ou une lourde répression politique;
- g) Instabilité économique provoquée par une pénurie de ressources ou des différends concernant leur utilisation ou leur exploitation;
- h) Instabilité économique provoquée par une crise grave de l'économie nationale;
- i) Instabilité économique provoquée par la misère, un chômage de masse ou de profondes inégalités horizontales;
- j) Instabilité sociale provoquée par une résistance à l'autorité de l'État ou à ses politiques ou par des protestations de masse contre celles-ci;
- (k) Instabilité sociale provoquée par l'exclusion ou des tensions fondées sur des questions d'identité, leur perception ou leurs formes extrémistes.

Facteur de risque 2. Antécédents de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire

- a) Restrictions ou violations graves, passées ou actuelles, des droits consacrés par le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, surtout si elles sont caractérisées par un comportement systématique observé préalablement et si elles visent des groupes, populations ou personnes protégés;
- b) Actes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou incitation à les commettre, survenus dans le passé;
- c) Politique ou pratique d'impunité ou de tolérance à l'égard de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, d'atrocités criminelles ou de l'incitation à les commettre;
- d) Inaction, réticence à utiliser ou refus d'utiliser tous les moyens possibles pour faire cesser des violations graves prévues, prévisibles ou persistantes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ou des atrocités criminelles probables, ou incitation à les commettre;

e) Maintien d'une aide à des groupes accusés de participer à des violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment des atrocités criminelles, ou non-condamnation de leurs actes;

f) Justification de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ou d'atrocités criminelles, rapports partiels les concernant ou refus de les reconnaître;

g) Absence de processus de réconciliation ou de justice transitionnelle après un conflit, ou politisation de ce processus;

h) Méfiance généralisée envers les institutions de l'État ou entre différents groupes en raison de l'impunité.

Facteur de risque 3. Faiblesse des structures de l'État

a) Cadre juridique national n'offrant pas une protection suffisante et efficace, notamment par la ratification et l'incorporation dans le droit interne des instruments relatifs au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire;

b) Manque de ressources au sein des institutions nationales, en particulier les institutions judiciaires et celles chargées de l'application des lois et de la protection des droits de l'homme, et manque de représentation adéquate ou de formation;

c) Absence de justice indépendante et impartiale;

d) Absence de contrôle civil efficace des forces de sécurité;

e) Niveaux élevés de corruption ou mauvaise gouvernance;

f) Absence ou insuffisance de mécanismes externes ou internes de contrôle et de responsabilité, notamment que les victimes peuvent saisir pour demander réparation;

g) Manque de sensibilisation et de formation des forces militaires, des forces irrégulières, des groupes armés non étatiques et des autres acteurs concernés au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire;

h) Manque de capacité de vérifier que les moyens et méthodes de guerre sont conformes aux normes du droit international humanitaire;

i) Manque de moyens pour la réforme ou le renforcement des institutions, notamment par une aide régionale ou internationale;

j) Ressources insuffisantes pour mettre en oeuvre des mesures globales de protection des populations.

Facteur de risque 4. Motivations ou incitations

a) Motivations politiques, en particulier celles visant l'acquisition ou la consolidation du pouvoir;

b) Intérêts économiques, notamment ceux fondés sur la préservation et le bien-être des élites ou de groupes d'identité, ou sur le contrôle de la répartition des ressources;

c) Intérêts stratégiques ou militaires, notamment ceux fondés sur la protection ou la saisie de territoires et de ressources;

d) Autres intérêts, notamment ceux visant à rendre une zone homogène dans son identité;

e) Menaces réelles ou perçues comme telles de groupes, populations ou personnes protégés contre les intérêts ou les objectifs des auteurs d'actes criminels, notamment l'impression de déloyauté envers une cause;

f) Appartenance ou adhésion réelle ou perçue comme telle de groupes, populations ou personnes protégés à des groupes d'opposition armés;

g) Idéologies fondées sur la suprématie d'une certaine identité ou sur des versions extrémistes de l'identité;

- h) Politisation de griefs, de tensions ou de cas d'impunité issus du passé;
- i) Traumatisme social provoqué par des situations de violence passées auxquelles il n'a pas été donné de suite satisfaisante et qui ont engendré des sentiments de perte, de déplacement et d'injustice et un désir possible de revanche.

Facteur de risque 5. Capacité de commettre des atrocités criminelles

- a) Disponibilité de personnel et d'armes et munitions ou de moyens financiers publics ou privés permettant de les acquérir;
- b) Capacité de transporter et déployer du personnel et de transporter et distribuer des armes et des munitions;
- c) Capacité d'encourager ou de recruter de nombreux partisans au sein de populations ou de groupes et disponibilité de moyens pour les mobiliser;
- d) Solide culture d'obéissance à l'autorité et de conformité au groupe;
- e) Présence d'autres forces armées ou de groupes armés non étatiques ou existence de liens avec de tels forces ou groupes;
- f) Présence d'acteurs commerciaux ou d'entreprises pouvant jouer un rôle déterminant en fournissant des biens, des services ou d'autres formes d'appui pratique ou technique contribuant à soutenir les auteurs;
- g) Appui financier, politique ou autre d'acteurs nationaux influents ou riches;
- h) Appui armé, financier, logistique ou autre, notamment sous la forme d'entraînement, fourni par des acteurs extérieurs, notamment des États, des organisations internationales ou régionales ou des entreprises privées.

Facteur de risque 6. Absence de facteurs atténuants

- a) Insuffisance ou absence de processus d'autonomisation, de ressources, d'alliés ou d'autres éléments qui pourraient contribuer à la capacité des groupes, populations ou personnes protégés de se protéger eux-même;
- b) Absence de société civile nationale solide, organisée et représentative et de médias nationaux libres, diversifiés et indépendants;
- c) Absence d'intérêt et d'attention des acteurs de la société civile internationale ou d'accès aux médias internationaux;
- d) Absence ou présence limitée des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales internationales ou d'autres acteurs internationaux ou régionaux dans le pays ayant accès aux populations;
- e) Absence d'adhésion ou de participation effective de l'État à des organisations internationales ou régionales établissant des obligations afférentes au statut de membre;
- f) Manque de contact, d'ouverture ou de relations politiques ou économiques avec d'autres États ou organisations;
- g) Coopération limitée de l'État avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme;
- h) Manque de volonté des parties à un conflit d'engager un dialogue, de faire des concessions et de solliciter l'appui de la communauté internationale, ou absence d'incitations à le faire;
 - Réticence ou échec des États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou des organisations internationales ou régionales à aider un État à assumer sa responsabilité de protéger ses populations contre les atrocités criminelles, ou à agir lorsque l'État n'assume manifestement pas cette responsabilité, ou indifférence à cet égard.

j) Manque de soutien des États voisins pour ce qui est de protéger les populations à risque en quête de refuge : fermeture des frontières, rapatriement forcé ou restrictions en matière d'aide;

k) Absence de mécanisme d'alerte rapide permettant de prévenir des atrocités criminelles.

Facteur de risque 7. Circonstances propices ou action préparatoire restreignant les droits fondamentaux

a) Suspension d'institutions vitales de l'État ou ingérence dans ces institutions, ou mesures provoquant des modifications de leur composition ou l'équilibre des pouvoirs, en particulier s'il en résulte l'exclusion ou une sous-représentation de groupes protégés;

b) Renforcement de l'appareil de sécurité, réorganisation ou mobilisation de celui-ci contre des groupes, populations ou personnes protégés;

c) Acquisition de grandes quantités d'armes et de munitions ou d'autres objets pouvant être utilisés pour causer des dommages;

d) Création de milices ou de groupes paramilitaires, ou intensification de l'appui à de tels milices ou groupes;

e) Imposition d'un contrôle strict sur l'utilisation des moyens de communication ou interdiction d'y avoir accès;

f) Expulsion ou refus d'autoriser la présence d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales, de médias ou d'autres acteurs pertinents ou imposition de lourdes restrictions à leurs services et déplacements;

g) Augmentation du nombre de violations du droit à la vie, de l'intégrité physique, de la liberté ou de la sécurité de membres de groupes, populations ou personnes protégés, ou adoption récente de mesures ou de lois qui leur portent atteinte ou constituent une discrimination délibérée envers eux;

(h) Augmentation du nombre d'actes de violence graves contre les femmes et les enfants ou création de conditions facilitant la commission d'agressions sexuelles contre eux, notamment comme instrument de terreur;

i) Imposition de conditions de vie délétères ou déportation, appréhension, regroupement, ségrégation, évacuation, déplacement ou transfert forcés de groupes, populations ou individus protégés vers des camps, des zones rurales, des ghettos ou d'autres lieux désignés;

j) Destruction ou pillage de biens ou d'installations essentiels à des groupes, populations ou personnes protégés, ou de biens liés à l'identité culturelle et religieuse;

k) Marquage de personnes ou de leurs biens au motif de leur appartenance à un groupe;

l) Politisation accrue de l'identité, d'événements du passé ou de motifs de se livrer à la violence;

m) Augmentation du nombre de déclarations provocatrices, de campagnes de propagande ou d'incitations à la haine visant des groupes, populations ou personnes protégés.

Facteur de risque 8. Facteurs déclencheurs

a) Déploiement soudain de forces de sécurité ou déclenchement d'hostilités armées;

b) Débordement de conflits armés ou graves tensions dans les pays voisins;

c) Mesures prises par la communauté internationale, perçues par un État comme menaçant sa souveraineté;

- d) Changements de régime, transferts de pouvoir ou modifications du pouvoir politique des groupes, survenant soudainement ou irrégulièrement;
- e) Atteintes à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté ou à la sécurité de dirigeants, de personnalités éminentes ou de membres de groupes opposés; autres actes de violence graves, notamment attentats terroristes ;
- f) Manifestations religieuses ou actes réels ou perçus comme tels d'intolérance religieuse ou d'irrespect, notamment en dehors des frontières nationales ;
- g) Actes d'incitation ou propagande haineuse visant des groupes ou des personnes particulières;
- h) Recensement, élections, activités essentielles liées à ces processus ou mesures qui les déstabilisent
- i) Changements soudains affectant l'économie ou la population active, résultant notamment de crises financières, de catastrophes naturelles ou d'épidémies;
- j) Découverte de ressources naturelles ou lancement de projets d'exploitation ayant de graves incidences sur les moyens de subsistance et la viabilité de groupes ou de populations civiles;
- k) Commémoration de crimes du passé ou d'épisodes traumatiques ou historiques pouvant exacerber les tensions entre groupes, notamment la glorification d'auteurs d'atrocités.

I. Actes liés aux processus d'établissement des responsabilités, en particulier s'ils sont perçus comme injustes

Version anglaise

Risk factor 1. Situations of armed conflict or other forms of instability

- a) International or non-international armed conflict;
- b) Security crisis caused by, among other factors, defection from peace agreements, armed conflict in neighboring countries, threats of external interventions or acts of terrorism;
- c) Humanitarian crisis or emergency, including those caused by natural disasters or epidemics;
- d) Political instability caused by abrupt or irregular regime change or transfer of power;
- e) Political instability caused by disputes over power or growing nationalist, armed or radical opposition movements;
- f) Political tension caused by autocratic regimes or severe political repression;
- g) Economic instability caused by scarcity of resources or disputes over their use or exploitation;
- h) Economic instability caused by severe crisis in the national economy;
- i) Economic instability caused by acute poverty, mass unemployment or deep horizontal inequalities;
- j) Social instability caused by resistance to, or mass protests against, State authority or policies;
- k) Social instability caused by exclusion or tensions based on identity issues, their perception or extremist forms.

Risk factor 2. Record of serious violations of international human rights and humanitarian law

- a) Past or present serious restrictions to or violations of international human rights and humanitarian law, particularly if assuming an early pattern of conduct and if targeting protected groups, populations or individuals;
- b) Past acts of genocide, crimes against humanity, war crimes or their incitement;
- c) Policy or practice of impunity for or tolerance of serious violations of international human rights and humanitarian law, of atrocity crimes, or of their incitement;
- d) Inaction, reluctance or refusal to use all possible means to stop planned, predictable or ongoing serious violations of international human rights and humanitarian law or likely atrocity crimes, or their incitement;
- e) Continuation of support to groups accused of involvement in serious violations of international human rights and humanitarian law, including atrocity crimes, or failure to condemn their actions;
- f) Justification, biased accounts or denial of serious violations of international human rights and humanitarian law or atrocity crimes;
- g) Politicization or absence of reconciliation or transitional justice processes following conflict;
- h) Widespread

Risk factor 3. Weakness of State structures

- a) National legal framework that does not offer ample and effective protection, including through ratification and domestication of relevant international human rights and humanitarian law treaties;
- b) National institutions, particularly judicial, law enforcement and human rights institutions that lack sufficient resources, adequate representation or training;
- c) Lack of an independent and impartial judiciary;
- d) Lack of effective civilian control of security forces;
- e) High levels of corruption or poor governance;
- f) Absence or inadequate external or internal mechanisms of oversight and accountability, including those where victims can seek recourse for their claims;
- g) Lack of awareness of and training on international human rights and humanitarian law to military forces, irregular forces and non-State armed groups, or other relevant actors;
- h) Lack of capacity to ensure that means and methods of warfare comply with international humanitarian law standards;
- i) Lack of resources for reform or institution-building, including through regional or international support;
- j) Insufficient resources to implement overall measures aimed at protecting populations.

Risk factor 4. Motives or incentives

- a) Political motives, particularly those aimed at the attainment or consolidation of power;
- b) Economic interests, including those based on the safeguard and well-being of elites or identity groups, or control over the distribution of resources;
- c) Strategic or military interests, including those based on protection or seizure of territory and resources;

- d) Other interests, including those aimed at rendering an area homogeneous in its identity;
- e) Real or perceived threats posed by protected groups, populations or individuals against interests or objectives of perpetrators, including perceptions of disloyalty to a cause;
- f) Real or perceived membership of or support for armed opposition groups by protected groups, populations or individuals;
- g) Ideologies based on the supremacy of a certain identity or on extremist versions of identity;
- h) Politicization of past grievances, tensions or impunity;
- i) Social trauma caused by past incidents of violence not adequately addressed and that produced feelings of loss, displacement, injustice and a possible desire for revenge.

Risk factor 5. Capacity to commit atrocity crimes

- a) Availability of personnel and of arms and ammunition, or of the financial resources, public or private, for their procurement;
- b) Capacity to transport and deploy personnel and to transport and distribute arms and ammunition;
- c) Capacity to encourage or recruit large numbers of supporters from populations or groups, and availability of the means to mobilize them;
- d) Strong culture of obedience to authority and group conformity;
- e) Presence of or links with other armed forces or with non-State armed groups;
- f) Presence of commercial actors or companies that can serve as enablers by providing goods, services, or other forms of practical or technical support that help to sustain perpetrators;
- g) Financial, political or other support of influential or wealthy national actors;
- h) Armed, financial, logistic, training or other support of external actors, including States, international or regional organizations, private companies, or others.

Risk factor 6. Absence of mitigating factors

- a) Limited or lack of empowerment processes, resources, allies or other elements that could contribute to the ability of protected groups, populations or individuals to protect themselves;
- b) Lack of a strong, organized and representative national civil society and of a free, diverse and independent national media;
- c) Lack of interest and focus of international civil society actors or of access to international media;
- d) Lack of, or limited presence of, the United Nations, international non-governmental organizations or other international or regional actors in the country and with access to populations;
- e) Lack of membership and effective participation of the State in international or regional organizations that establish mandatory membership obligations;
- f) Lack of exposure, openness or establishment of political or economic relations with other States or organizations;
- g) Limited cooperation of the State with international and regional human rights mechanisms;
- h) Lack of incentives or willingness of parties to a conflict to engage in dialogue, make concessions and receive support from the international community;

- i) Lack of interest, reluctance or failure of States Members of the United Nations or members of international or regional organizations to support a State to exercise its responsibility to protect populations from atrocity crimes, or to take action when the State manifestly fails that responsibility;
- j) Lack of support by neighbouring States to protect populations at risk and in need of refuge, including by closure of borders, forced repatriation or aid restriction;
- k) Lack of an early warning mechanism relevant to the prevention of atrocity crimes.

Risk factor 7. Enabling circumstances or preparatory action

- a) Imposition of emergency laws or extraordinary security measures that erode fundamental rights;
- b) Suspension of or interference with vital State institutions, or measures that result in changes in their composition or balance of power, particularly if this results in the exclusion or lack of representation of protected groups;
- c) Strengthening of the security apparatus, its reorganization or mobilization against protected groups, populations or individuals;
- d) Acquisition of large quantities of arms and ammunition or of other objects that could be used to inflict harm;
- e) Creation of, or increased support to, militia or paramilitary groups;
- f) Imposition of strict control on the use of communication channels, or banning access to them;
- g) Expulsion or refusal to allow the presence of non-governmental organizations, international organizations, media or other relevant actors, or imposition of severe restrictions on their services and movements;
- h) Increased violations of the right to life, physical integrity, liberty or security of members of protected groups, populations or individuals, or recent adoption of measures or legislation that affect or deliberately discriminate against them;
- i) Increased serious acts of violence against women and children, or creation of conditions that facilitate acts of sexual violence against those groups, including as a tool of terror;
- j) Imposition of life-threatening living conditions or the deportation, seizure, collection, segregation, evacuation or forced displacement or transfer of protected groups, populations or individuals to camps, rural areas, ghettos or other assigned locations;
- k) Destruction or plundering of essential goods or installations for protected groups, populations or individuals, or of property related to cultural and religious identity;
- l) Marking of people or their property based on affiliation to a group;
- m) Increased politicization of identity, past events or motives to engage in violence;
- n) Increased inflammatory rhetoric, propaganda campaigns or hate speech targeting protected groups, populations or individuals.

Risk factor 8. Triggering factors

- a) Sudden deployment of security forces or commencement of armed hostilities;
- b) Spillover of armed conflicts or serious tensions in neighbouring countries;
- c) Measures taken by the international community perceived as threatening to a State's sovereignty;
- d) Abrupt or irregular regime changes, transfers of power, or changes in political power of groups;

- e) Attacks against the life, physical integrity, liberty or security of leaders, prominent individuals or members of opposing groups; other serious acts of violence, such as terrorist attacks;
 - f) Religious events or real or perceived acts of religious intolerance or disrespect, including outside national borders;
 - g) Acts of incitement or hate propaganda targeting particular groups or individuals;
 - h) Census, elections, pivotal activities related to those processes, or measures that destabilize them;
 - i) Sudden changes that affect the economy or the workforce, including as a result of financial crises, natural disasters or epidemics;
 - j) Discovery of natural resources or launching of exploitation projects that have a serious impact on the livelihoods and sustainability of groups or civilian populations;
 - k) Commemoration events of past crimes or of traumatic or historical episodes that can exacerbate tensions between groups, including the glorification of perpetrators of atrocities;
 - l) Acts related to accountability processes, particularly when perceived as unfair.
-